

Capítulo V Memoria Democrática



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4.659	3,918	3,900	5,247
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	5,275	4,806	5,455
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	2,047	1,373	2,950
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		0,947	0,631	0,842
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,433	0,990	1,246

PRESIDENTES: ADOLFO RODRÍGUEZ SAA- EDUARDO CAAMAÑO- EDUARDO DUHALDE

Empezó el año 2002 con la renuncia de Adolfo Rodríguez Saá a la Presidencia de la Nación y la entrada de Eduardo Duhalde.

El recuento de este "carrusel" de presidentes por sí mismo reflejaba la existencia de una aguda crisis de gobernabilidad. No sólo había fracasado un gobierno radical, sino que el sistema político se mostraba agotado. Ya había habido una señal de esto en las elecciones legislativas de octubre de 2001, donde se habían dado altas tasas de abstención y votos nulos. Lo que ocurrió en esas semanas demostró que ese llamado "voto bronca", se había transformado en un rechazo violento a la clase política y al sistema que se había expresado en las calles de manera inorgánica, pero con capacidad para derribar a dos gobiernos.

En el nuevo gobierno de Duhalde había dos Ministros (Justicia y Defensa) que provenían de la UCR y el Vice Jefe de Gabinete del Frepaso. Fue un gobierno con base parlamentaria amplia (PJ, UCR y Frepaso). Fue un gobierno de "cuasi-coalición". Por primera vez en la historia argentina el peronismo y el radicalismo participaban de un gobierno y constituían una mayoría parlamentaria.

El Presidente Duhalde logró conformar un consenso político entre las corrientes estatistas del peronismo, la corriente alfonsinista del radicalismo y el Frepaso. Pero se trataba de un consenso precario. Allí no estaba todo el justicialismo, como quedó en evidencia en la discusión legislativa con el voto en contra del menemismo a las medidas de emergencia económica. Por razones distintas tampoco estaba toda la izquierda, a la espera seguramente de poder capitalizar la protesta social que no se ha detenido.

El nuevo gobierno se conformó en medio de una profunda "crisis global" (concurrían simultáneamente la crisis económica, la crisis política y la crisis social). El Presidente Duhalde manifestó reiteradamente que con el nuevo gobierno terminaba "la etapa de alianza del Estado con el capital financiero" y comenzaba una etapa de "alianza del Estado con la producción".

La Argentina se encontraba en default; en depresión, luego de cuatro años de recesión; se preveía que el Producto Bruto Interno sería negativo durante el 2002; 15.000.000 de argentinos vivían en la pobreza y la desocupación abierta era del 20% de la población activa. Por lo tanto, la recuperación económica sería una tarea titánica.

El efímero presidente Rodríguez Saa había decretado la moratoria en el pago de la deuda externa, luego ratificada por Duhalde. Esa decisión terminó por liquidar el pequeño saldo de confianza que tenía Argentina en las entidades financieras internacionales y en la comunidad de negocios.

El desafío era gigantesco, pero el gobierno de Duhalde era débil. Débil, ante todo, porque había sido elegido por un Congreso Nacional cuestionado moral y políticamente por la sociedad. Además, era un gobierno de transición con mandato hasta diciembre del 2003 y el PJ se había unido a través de un "equilibrio inestable" entre las corrientes internas mayoritarias.

Duhalde, con sus medidas de emergencia dio un nuevo perfil a la economía argentina: se retornó al proteccionismo, legitimando la adopción de barreras arancelarias, con lo cual se marginaba cualquier posibilidad de ser incluida en el proyecto ALCA o de celebrar, vía MERCOSUR, acuerdos comerciales con la Unión Europea. Se cuestionaron las privatizaciones de los años noventa, amenazando implícitamente a las inversiones extranjeras con mayores regulaciones a su funcionamiento o a la repatriación de utilidades. No se descartaba un retorno, aunque parcial, a la fijación de precios, con lo cual la economía de mercado dejaría en la práctica de funcionar.

El presidente proclamaba en todos los tonos su aversión a una estrategia de desarrollo sustentada en el libre mercado y se mostraba complacido de adoptar medidas que apuntaran a su desmantelamiento. Al asumir la Presidencia, Duhalde sinceró el estado de situación al admitir que "Argentina está fundida, no tenemos crédito externo ni interno". Sus definiciones económicas y políticas no ayudaron, sin embargo, a superar la crisis, pues incrementaron el riesgo político de inversión, aislaron al país de los escenarios de libre intercambio comercial, alejaron las posibilidades de recuperar la confianza en el exterior y amenazaron con precipitar el retorno de la inflación.

Las negociaciones con el FMI, en el intento de alcanzar un acuerdo para el pago de la deuda y negociar nuevos créditos, marcaron la mayor parte del año y sólo en diciembre se logró alcanzar un preacuerdo para retrasar los pagos hasta 2004.

Marzo fue un mes de agudización de la crisis económica y a la vez marcó el reinicio de las movilizaciones inorgánicas que desembocaron en estallidos sociales que afectaban principalmente al comercio. Mientras tanto, los políticos comenzaban a preocuparse del escenario electoral que abría las elecciones presidenciales a septiembre. En el peronismo se levantaba el nombre de Hilda de Duhalde, esposa del Presidente y ex legisladora por Buenos Aires. El radicalismo estaba barajando varias opciones. Otras alternativas que se planteaban eran la diputada de izquierda Elisa Carrió, y Patricia Bultrich, ex Ministra de Fernando de la Rúa.

La población sin embargo no estaba inquieta por el tema electoral. Le angustiaba la asfixia económica y vivir de manera constante en una situación de precariedad e incertidumbre.

En los sectores sociales más deprimidos retornaron los síntomas de estallidos sociales con saqueos a supermercados, almacenes y bodegas. En los saqueos se entrecruzaban quienes actuaban por falta de alimentos con quienes aprovechaban la coyuntura para robar. Ante ello, el gobierno señaló que no actuaría con mano dura (queriendo evitar la reproducción de los días finales del presidente de la Rúa) decisión que al hacerse pública se convirtió en una invitación a desencadenar mayores acciones de este tipo.

Entre tanto el Fondo Monetario Internacional seguía sin renovar sus créditos al país mientras éste no le asegurara lo que ya era imposible, un plan real de reducción de déficits.

En lo político el gobierno se veía entrampado por las circunstancias a las que buscaba adecuarse: en los comienzos de su administración Duhalde fue uno de los que impulsó el juicio político a la Corte Suprema. Cuando ésta le envió la señal que aprobaba los recursos de ahorristas que intentaban romper el "corralito" que les impedía recuperar sus ahorros en dólares, volvió sobre sus pasos y alineó a sus parlamentarios tras la decisión de rechazar la acusación. La presión de un poder político se impuso sobre el otro.

En el marco de masivas movilizaciones y una represión que terminó con dos nuevos muertos, los gobernadores impusieron, en mayo, un cambio de gabinete y la adhesión del Presidente a un plan de "14 puntos", que estableció una nueva racionalidad política.

También en lo político estuvo la poco afortunada decisión gubernativa de obligar a los partidos políticos a definir sus candidaturas presidenciales en elecciones primarias, las que

además estableció en una fecha fija para todas las colectividades: el 15 de diciembre próximo. Bastó una resolución judicial que estimara inconstitucional el decreto presidencial para que la simultaneidad de las elecciones primarias se viniera abajo.

En Julio se produce el anuncio del adelanto de las elecciones y las disputas en el seno peronista, marcaron la pauta.

El gobierno sostenía que había comenzado la reactivación económica y la realidad mostraba a niños muriéndose de hambre. El gobierno señalaba que se había alcanzado un consenso político interno y la realidad hablaba de los desencuentros legislativos para materializarlo efectivamente. El gobierno prometía al FMI reducir el déficit fiscal, pero decretaba una baja en la tasa del IVA con lo cual los ingresos tributarios en una economía en crisis iban a disminuir. En fin, el gobierno fijó un calendario electoral presidencial y era el mismo gobierno quien buscaba retrasarlo lo más posible ante el temor de que al final triunfara el ex presidente Menem, enemigo político de Duhalde.

Es necesario recordar que el proceso electoral llegó de la mano de un gobierno cada vez más débil, que tuvo como sostén el acuerdo de 14 puntos firmado con los Gobernadores, y que se vio obligado a adelantar la fecha de las elecciones como una necesidad para evitar su caída.

El presidente Duhalde sufrió los efectos políticos que implicaron perder el control de la calle, ya que cuando el 26 de junio de 2002 dos piqueteros resultaron muertos por enfrentamientos con efectivos de la policía bonaerense en el Puente Avellaneda y las organizaciones piqueteras convocaron una manifestación contra la represión para el día 3 del mes siguiente, el 2 de julio el presidente anunció el recorte en seis meses de su mandato.

El gobierno anunció que tras una reunión del Presidente con los gobernadores provinciales, a la que no concurrieron los partidarios de Carlos Menem, se había construido en el país un consenso político en torno a algunas de las medidas reclamadas por el FMI y acerca de la fijación definitiva del calendario electoral. Pero lo que el gobierno presentaba como consenso político no parecía tal. Ya en la tramitación legislativa de algunos puntos de ese acuerdo, la Unión Cívica Radical aclaraba que no lo respaldaría si no se solucionaba el problema de los deudores hipotecarios (suspensión de las ejecuciones judiciales), cuestión a la que se sumaron los parlamentarios justicialistas que seguían la candidatura de Adolfo Rodríguez Saa. A su vez, los congresistas partidarios de Menem indicaron que no estaban dispuestos a validar el retraso del cronograma electoral que proponía el gobierno. Entonces ¿de qué consenso se estaba hablando?

Si con el anuncio del "consenso" el gobierno pretendió convencer al FMI de que estaba cumpliendo con una de sus demandas, la reacción de éste probó que dicho convencimiento no llegaba. Thomas Dawson, vocero de la entidad, recordó que varios de los puntos del "consenso" ya habían sido "consensuados" en el mes de abril, cuando se firmaron 14 puntos de acuerdo, que nunca se implementaron. Nuevamente apareció el problema de la falta de credibilidad que marcaba negativamente a la administración Duhalde.

Había una suerte de feudalización del poder, donde cada quien tenía una cuota y la ejercía sea como instrumento de presión o como veto. El Presidente, lejos de sincerar esta realidad política, optó por los anuncios optimistas que no se sustentaban a sí mismos porque los hechos cotidianos los desmentían.



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,343	2,883	4,150
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,993	4,414	6,216
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	4,033	3,087	3,033
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		0,181	-0,044	-0,054
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-1,521	-1,697	-0,896

PRESIDENTE: JORGE QUIROGA
PRESIDENTE ELECTO: GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS: 30-06-2002

La obligada sucesión constitucional, en agosto del 2001 cuando el vicepresidente Jorge Quiroga relevó en la Presidencia al general Hugo Banzer, afectado por una enfermedad terminal que en poco tiempo lo llevaría a la muerte, permitió una tregua de apenas unas semanas en el conflicto social persistente, que continuó a pesar de las infructuosas negociaciones del Gobierno. El cambio abrió esperanzas, pero al cabo de tres meses, estas se apagaron y las protestas volvieron a subir de tono, no sólo desde las filas de los trabajadores y los desempleados, sino también desde la empresa privada, que casi no pudo controlar el descalabro del sector. Los tres planes de reactivación económica, aprobados desde 1997, no pudieron revertir la situación de caída económica y social.

Bolivia ha concluido el tercer año consecutivo de crecimiento negativo. Esta situación ocurrió en medio de esfuerzos del Gobierno por lograr importantes acuerdos para la venta de gas, no sólo a los Estados Unidos sino también a Brasil, en circunstancias en que el país cuenta con el segundo depósito más importante de gas natural en América del Sur. Este era un importante potencial que el presidente Quiroga estuvo tratando –sin éxito– de utilizar para que el Gobierno pudiera recibir recursos para sus programas de ayuda a la pobreza.

Las obligaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos, determinaron la militarización de la principal zona de cultivo de hoja de coca, materia prima de la cocaína, a fin de acabar por la fuerza con su producción. Los coccaleros se resistieron a exterminar las plantaciones de coca, cuya hoja no sólo era un símbolo importante de la identidad cultural de las mayorías indígenas, sino que había sido crucial para sobrevivir durante la prolongada crisis económica que soportaba la nación.

El gobierno de transición del presidente Jorge Quiroga, las críticas perspectivas económicas y la carrera electoral hacia las elecciones presidenciales de 2002 fueron factores que se combinaron para limitar las iniciativas gubernamentales que hubieran consolidado éxitos en la lucha contra el Narcotráfico. Las estadísticas de erradicación de 2002 fueron las segundas más altas registradas en Bolivia en toda la lucha contra las drogas.

En el mes de junio de 2002 se celebraron las elecciones de las que saldría elegido presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo lo más significativo de estos comicios fue el ascenso obtenido por el Movimiento al Socialismo (MAS), movimiento campesino e indígena encabezado por el líder coccalero Evo Morales. El MAS obtuvo la segunda posición en las elecciones rompiendo la hegemonía de los partidos tradicionales en el Congreso.

En los comicios hubo dos victorias populares, la abstención, que llegó a cerca del tercio de los inscritos (29.93%), sumándose a la oleada internacional de descrédito de las instituciones, y la formación de un poderoso bloque parlamentario subordinado a las organizaciones sociales.

En las elecciones se eligieron Presidente, Vice, diputados y senadores. En la reñida carrera presidencial, Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Revolucionario Nacionalista (MRN), obtuvo la mayoría de los votos, seguido por Evo Morales, del Movimiento al Socialismo. Como ninguno de los candidatos superó el 50% requerido por la ley boliviana para ganar la presidencia, el Congreso debió elegir al presidente entre los dos primeros finalistas.

Luego de un tenso periodo de negociaciones y diálogo político, MNR y MIR alcanzaron un acuerdo a partir de los aspectos coincidentes de sus propuestas electorales.

Quien finalmente dirimió la disputa fue el ex Presidente Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que a pesar de tener el cuarto lugar en votación, logró el tercero en número de parlamentarios gracias al desempeño de los candidatos uninominales y a buenos resultados en el Senado.

La distinta consistencia partidaria explica las diferencias de votos obtenidas por los cuatro partidos, el MNR, MIR, MAS y NFR. Mientras el MNR y el MIR demostraron una organización capaz de cubrir el país entero, Reyes Villa (NFR) y Morales (MAS) tuvieron una votación regionalmente concentrada. La imagen personal de ambos no fue suficiente para sobreponerse a su falta de estructuras partidarias, aunque uno de ellos, Evo Morales, contó con las organizaciones sindicales de campesinos.

Lejos de estas cuatro fórmulas se ubicaron los demás participantes, incluidos el movimiento indigenista aymara y el principal partido de la coalición que gobernó el país durante los últimos cinco años, Acción Democrática Nacionalista (ADN), del fallecido Banzer Suárez.

Gonzalo Sánchez de Lozada, así retornó a la Presidencia de Bolivia acompañado en la fórmula por el historiador y periodista Carlos Mesa.

El ascenso del MAS de Evo Morales, que pasa a jugar un rol central en la nueva situación política boliviana, admite muchas y diversas explicaciones, igualmente válidas. Su característica central es que contó con un liderazgo personal de vigorosa proyección pública y un núcleo social muy consistente. El núcleo del MAS estuvo integrado por los colonizadores campesinos que producían hoja de coca y que disponían de una organización centralizada con sólidas raíces locales. Se trató de un grupo fuertemente cohesionado en la defensa de los cultivos de coca, hecho que lo situaba simbólicamente frente a un enemigo inmensamente superior, nada menos que los Estados Unidos y su política antidrogas. Ello dotó a su reivindicación de un sentido nacionalista que terminó por atraer a los militantes y simpatizantes de la izquierda tradicional boliviana. Pero esa izquierda parecía que no representaba un aporte importante de votos porque no tenía organización ni propuestas programáticas. El electorado urbano del MAS fue el mismo cuyo apoyo había estado fluctuando de uno a otro candidato en busca de expresar su frustración y su descontento.

Podemos sintetizar que las elecciones presidenciales y parlamentarias tuvieron cuatro grandes consecuencias:

a) una significativa recomposición del sistema de partidos. El sistema moderado de cinco partidos que prevaleció desde las elecciones de 1989 (MNR, MIR, ADN, UCS y CONDEPA) se transformó en un sistema polarizado de cuatro partidos y movimientos políticos importantes (MNR, MIR VRS. MAS, NFR). El tripode de partidos se deshizo: ADN sufrió una catastrófica derrota al alcanzar sólo el 3,4% de votos y 5 escaños, pero lo destacable es precisamente que el MNR y el MIR mantuvieran sus posiciones de partidos relevantes. El MNR ganó estas elecciones por una ligera mayoría relativa, con el 22,46% de los votos; pero obtuvo la bancada más fuerte con 47 escaños, mientras que el MIR, con el 16,32% de los votos, se colocó como tercera fuerza parlamentaria con 31 de los 157 escaños parlamentarios. El sistema de cinco partidos también se deshizo, porque dos partidos neopopulistas -UCS y CONDEPA- que surgieron a fines de la década de los ochenta pasaron al limbo.

La recomposición ha sido también significativa debido a dos factores importantes. En primer lugar, el movimiento campesino liderado por Evo Morales se ubicó en segundo lugar con el 20,94% de los votos y 35 escaños participando con la sigla del Movimiento al Socialismo (MAS). Si se agrega al Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) dirigido por Felipe Quispe -otro movimiento con arraigo en algunas provincias del Norte de La Paz- que consiguió el 6,09% de los votos y 6 escaños, los movimientos campesinos, transformados en movimientos políticos, lograron una representación histórica: conjuntamente tuvieron el 27,03% de los votos y 41 escaños, que constituyeron el 26% del total de escaños en el Parlamento. En segundo lugar, Nueva Fuerza Republicana, un partido neopopulista dirigido por Manfred Reyes Villa, se ubicó, en términos de votos, en el tercer lugar con el 20,91% de los votos pero, en términos de escaños, en el cuarto lugar.

b) una fuerte polarización entre partidos tradicionales y nuevas fuerzas políticas. El segundo efecto importante fue la polarización del sistema multipartidista moderado en virtud del surgimiento de un movimiento político de tendencia fuertemente antisistémica, el MAS, y un partido neopopulista muy personalista y débilmente estructurado, el NFR. Ambos capturaron el descontento con los partidos que dominaron el proceso democrático y encabezaron las reformas políticas y económicas realizadas desde 1985, aunque sin lograr desplazarlos. Es decir, la polarización modificó el escenario político y creó una nueva correlación de fuerzas políticas, pero los dos partidos que formaron el eje del sistema -el MNR y el MIR- resistieron el embate neopopulista y antisistémico manteniendo las pautas centrales de negociación y concertación que fueron la base de la democracia pactada en Bolivia a partir de 1985.

c) un avance cualitativo de la representación política por la inclusión de sectores indígenas y campesinos al sistema político. Debido a las características del sistema electoral de doble circunscripción y representación proporcional personalizada que estaba vigente desde 1997, el sistema democrático demostró tener una gran capacidad de inclusión fortaleciendo la tendencia hacia una representación autónoma de sectores populares y campesinos. Permitió que movimientos sociales puedan transformarse en movimientos políticos.

d) una importante redistribución territorial del voto. Es notable que el MAS haya ganado las elecciones por mayoría relativa en cuatro de los cinco departamentos donde está concentrada la población indígena: La Paz, Oruro, Cochabamba y Potosí. Por otra parte, el MNR triunfó en los departamentales orientales y amazónicos -Santa Cruz, Beni y Pando- mientras que el MIR ganó sólo en Tarija.

BRASIL



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,348	5,028	3,932
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,543	4,291	3,791
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	3,175	5,083	3,833
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		0,007	0,920	0,740
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,369	-0,237	-0,501

PRESIDENTE: FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
PRESIDENTE ELECTO: LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS: 6-10-2002

Finalizaban ocho años de gestión del Presidente Cardoso y para muchos analistas dejaba un Brasil con estabilidad, con más alumnos en las escuelas y con una renta un poco mejor distribuida, pero sin haber crecido, con tasas de desempleo históricas y con una vulnerabilidad económica externa que lo había acosado hasta en los últimos meses de su gobierno.

En sus ocho años en el poder, Cardoso controló la inflación, privatizó empresas gigantes estatales, reformó parte de la Asistencia Social y promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal, que puso en caja al Estado y controló el déficit público. Licitó 36 empresas estatales, por las que recaudó 21.800 millones de dólares, que sirvieron apenas para pagar servicios de la abultada deuda pública que acumuló durante su gobierno, con las tasas más altas del mundo.

Logró evitar la recesión, pero no logro que Brasil crezca. La tasa de crecimiento económico de su primer mandato fue del 2,6 por ciento y la de segundo mandato de 2,2 por ciento, por debajo del aumento de la población.

Cardoso también tuvo que enfrentar un contexto económico internacional muy difícil en el que, globalización mediante y dada la vulnerabilidad externa de su modelo económico, el país quedó expuesto a las crisis de México, de Rusia y de Argentina.

En el plano político, su estilo de gobierno fue ocuparse de lo macro y sólo intervenir ante contradicciones de sus ministros. El único ministro que se mantuvo durante los ocho años fue Pedro Malán, el súper ministro de Hacienda.

Críticos y seguidores admitieron que Cardoso dejaba un Brasil más democrático, con menos poder de los coroneles de la vieja política autoritaria. Buscó el consenso, pero también firmó más de 5.000 decretos para evitar al Congreso.

Las últimas encuestas mostraron que la mayoría de los brasileños tenía una opinión relativamente favorable del gobierno de Cardoso, aunque todos querían un cambio. La mayoría también creía que era más inteligente que los cuatro principales candidatos para la elección de octubre.

En octubre de 2002, Brasil eligió a un nuevo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, con un apoyo superior al 60% de los votos. Tras haber sido candidato en tres ocasiones consecutivas a la presidencia (1989, 1994 y 1998), cuando Lula y su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), abogaron en 2002 por un cambio radical (socialismo democrático) se embarcaron en una versión moderada del típico discurso de la izquierda en América Latina. A pesar de su estilo moderado, ganaron las elecciones gracias a la promesa de sustituir la tendencia neoliberal de las dos presidencias de Cardoso (1994-2002), por una en la que el Estado se implicara en iniciativas de planificación estratégica para fomentar mayores niveles de crecimiento económico.

En la segunda vuelta Lula obtuvo más de 52.700.000 votos, bastantes más que los 46 millones recibidos en la primera vuelta. Sin embargo no se debe olvidar que la suma de los sufragios conquistados por Lula, Garotinho y Gomes en la primera vuelta fue del 76% de los sufragios y que, a diferencia de lo que ocurre en elecciones muy reñidas, las segundas vueltas se prestan a resultados de este tipo. En ese sentido, hay que tener presente que con sus 91 diputados (de 513) y 14 senadores (de 81) el PT se convirtió en la principal fuerza política de Diputados y la tercera del Senado, pero que aún así muy lejos de la mayoría necesaria para gobernar un país tan complejo como Brasil.

Sin embargo, los brasileños se sorprendieron al ver que el mayor cambio en el país se produjo en el propio PT, así como en otros partidos de izquierda. Acostumbrados a discursos apasionados en los que se explicaban los motivos por los que el planteamiento de estabilidad macroeconómica defendido por la Administración Cardoso no era bueno para el país, el nuevo Gobierno anunció desde el principio que desarrollaría una estrategia muy conservadora, una estrategia fundada en la responsabilidad fiscal y en reformas

estructurales neoliberales. La nueva estrategia incluiría un mantenimiento del proceso de ajustes fiscales, la implicación del Ejecutivo en las negociaciones políticas con el Congreso y gobernadores estatales para reducir el enorme déficit del régimen de pensiones de los trabajadores del sector público y el fomento de una mayor flexibilidad de las leyes laborales con respecto a las que marcaron la era Cardoso.

En lo que se refiere al giro a la izquierda habría que señalar que este titular se hubiera producido cualquiera que hubiera sido el ganador de la elección, incluido al oficialista José Serra y los dos grandes derrotados de la primera vuelta, Anthony Garotinho y Ciro Gomes. Todos ellos, comenzando por el propio Lula, estaban a la izquierda del entonces presidente Fernando Enrique Cardoso, y todos ellos apostaban por un mensaje mucho más claro y contundente en lo que a problemas sociales se refiere. De este modo, y para reforzar la idea de ruptura con el pasado, todos habían minimizado los grandes logros obtenidos por el gobierno a lo largo de sus ocho años de mandato. De cara a los debates de la elección, muchos analistas habían insistido en la gran semejanza de los programas electorales de Lula y de Serra.

Lula salió de las elecciones de 2002 contando con una escasa base de apoyo en el Congreso, considerando los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta. Sumados, formaban 219 diputados (42,7%) y 30 senadores (37,0%), insuficientes para sustentar un gobierno, sobre todo ante la exigencia de un quórum de 3/5 para modificar la constitución - como ocurrió con las reformas presupuestarias, tributaria, y con la eliminación en la constitución de la reglamentación del sistema financiero.

CHILE



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	10,242	10,031	8,757
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	8,894	7,382	5,061
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	9,183	10,00	10,00
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		1,048	1,392	1,381
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		1,358	1,288	1,073

Presidente: Ricardo Lagos

Tras arduas y prolongadas negociaciones, 2002 fue el año en el que alcanzó dos acuerdos históricos. En noviembre se concretaba en Bruselas el Acuerdo de Asociación con la UE y en diciembre, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En lo político, el gobierno de la Concertación inició el año debilitado tras la pérdida de siete diputados en las elecciones legislativas de diciembre de 2001 y no pudo alcanzar consenso para la reforma de la Constitución.

Luego de las elecciones, el Presidente introdujo modificaciones a su Gabinete. Eran esperadas, no tanto como un ajuste que diera cuenta de la proporcionalidad de los resultados electorales, sino como pauta de inicio de una nueva etapa en la gestión gubernativa. Al fin de cuentas el nivel de apoyo que tenía el gobierno descendió de aquel recibido en las elecciones municipales del 2000 y volvió a ubicarse en un porcentaje similar al logrado en la primera vuelta presidencial de diciembre de 1999.

La modificación ministerial se realizó luego de completarse procesos similares en los niveles de las Intendencias y Gobernaciones. En los niveles inferiores del gobierno se incorporó a gente joven con perfil más técnico y menos ideológico, aun cuando se procuró conservar los equilibrios políticos dentro de la Concertación.

En el caso de los ministros, los cambios no fueron tantos y no alcanzaron a todas las Carteras donde había críticas respecto a la calidad de la gestión. Fue así como permanecieron en sus funciones los ministros de Agricultura, Educación y Trabajo.

No fue un cambio que alteró de manera importante los equilibrios en la representatividad de los partidos de la Concertación en el gobierno. De hecho, la Democracia Cristiana, partido claramente derrotado en las pasadas elecciones, tuvo mayor presencia en el gabinete. El Partido Socialista disminuyó su representación, pero tuvo dos importantes secretarías: Interior y Defensa.

El área más sensible a las modificaciones fue la política. Se materializaron las que eran previsibles: la salida de los ministros García y Huepe. El nuevo perfil del sector reafirmó el liderazgo político del ministro José Miguel Insulza. Además, se colocó en la Secretaría de la Presidencia al DC Mario Fernández para dar una señal de mayor preocupación gubernativa sobre las negociaciones con las bancadas parlamentarias, en un escenario donde el entendimiento con la oposición y la manutención del alineamiento de los demócratacristianos resultaron cruciales para la gestión de Lagos. La vocería del gobierno, fue asignada esta vez a un miembro del PPD, no tuvo la relevancia de otras épocas, dado el estilo opinante del propio Presidente. Lo sustantivo de esta modificación fue, en definitiva, la manutención del liderazgo del Ministro Insulza en el área política y del Ministro Eyzaguirre en la económica.

La consolidación de la gravitación de Insulza en el área política fue proyectando un liderazgo con proyecciones futuras dentro de la Concertación, en especial dentro de los sectores denominados "progresistas", quienes lo visualizaron como un competidor para enfrentar los eventuales liderazgos que surjan de una Democracia Cristiana abrumada por su marcada declinación electoral.

El mantenimiento del equipo económico fue, sin duda, la mejor señal que se desprendió de la modificación ministerial. Primó la estabilidad, cuya proyección fue la mejor fortaleza que pudo mostrar el gobierno hacia los inversionistas, precisamente cuando sus poderosos vecinos, Argentina estaba sumida en profundas crisis o Brasil en fuertes incertidumbres.

En definitiva, el ajuste ministerial realizado tuvo las siguientes connotaciones. En primer lugar, importó una reafirmación de la línea económica que venía siguiendo el gobierno. Dentro de la Concertación importó un respaldo a las tendencias "liberales" por sobre las "estatistas".

En segundo lugar, se ratificó al Ministro del Interior como jefe político del gabinete, expandiendo su gravitación en el área política, siendo un secretario de Estado capaz de mantener un perfil de cierta autonomía frente a la absorbente figura presidencial.

En tercer lugar, el nombramiento de una socialista en el ministerio de Defensa no sólo constituyó un hecho singular por designarse allí a una mujer, sino que evidenció la normalización de las relaciones entre el poder político civil y las Fuerzas Armadas, lo cual reforzó la percepción de estabilidad institucional que se tenía de Chile.

En cuarto lugar, el cambio tendía a superar conflictos sectoriales que restaban coherencia al quehacer gubernamental. Se eliminó la contraposición que existía en el área política entre los ministros Insulza y García, cuestión que se reiteró en Relaciones Exteriores poniéndose fin a la contraposición entre la titular de la Cartera y el subsecretario.

Por último, era un gabinete que mantenía los equilibrios políticos en la representatividad de los partidos de la Concertación y entre ésta y el Presidente, lo que se expresó en la conformidad que encontraron en aquéllos los nombramientos.

A finales de año la vida política se agitó por varios casos de corrupción que salpicaron a la Concertación, los chilenos vivieron atónitos este capítulo ya que Chile es uno de los países con menor índice de corrupción del mundo. El país se vio impactado por un grave problema

de corrupción, en el que aparecieron involucrados ex funcionarios de gobierno, además de algunos parlamentarios.

Hacia fines de 2002 el desafuero de cinco diputados resuelto por la vía de la apelación por la Corte Suprema y la prisión para un ex ministro revelaron que, efectivamente, en Chile las instituciones funcionan. Lo acordado por la Corte Suprema fue un paso importante para que la investigación judicial del llamado "caso coimas" prosiguiera sin escollos. Desde luego, no era un escenario de condena de los parlamentarios, como se presentaba en los medios de comunicación, sino de despojarlos del fuero parlamentario para que, como el resto de los ciudadanos, quedaran a plena disposición de los tribunales, en este caso del ministro sumariante de la causa.

COLOMBIA



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,054	4,218	5,254
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,582	3,636	5,465
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	3,548	5,575	5,642
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-0,370	0,134	0,021
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,652	-0,999	-0,619

PRESIDENTE: ANDRÉS PASTRANA
PRESIDENTE ELECTO: ALVARO URIBE
ELECCIONES LEGISLATIVAS: 10-03-2004
ELECCIONES PRESIDENCIALES: 26-05-2006

El 20 de febrero de 2002 se produjo la ruptura del proceso de paz ideado por el Presidente Pastrana. Una serie de actos terroristas durante los meses de enero y febrero de 2002, seguidos del secuestro de un senador de la república, condujeron al presidente Pastrana a romper definitivamente las negociaciones. Algunas acciones después de la ruptura parecían confirmar los temores iniciales sobre el advenimiento de una guerra total.

El 23 de febrero, las FARC secuestraban a la senadora y candidata presidencial Ingrid Betancourt. En el mes de abril secuestraron a 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, al gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y al ex- ministro de Defensa Gilberto Echeverri Mejía, quienes se sumaban así a otro gran número de personas –incluidos un centenar de miembros de la policía y el ejército– que mantenían desde antes de la ruptura en distintos campos de concentración como parte de una estrategia dirigida a forzar al gobierno a intercambiar guerrilleros presos por secuestrados.

En julio, las FARC realizaron una campaña de intimidación contra las autoridades locales de elección popular y funcionarios judiciales –a los que señalaron como blancos militares.

Durante su candidatura, el actual Presidente Alvaro Uribe no planteó cerrar las puertas al diálogo con los grupos armados irregulares, o los violentos. Prometió nuevas condiciones para negociar, mientras redefinía los objetivos de la paz, en un mensaje que fue ganando adeptos frente a las frustraciones del proceso de paz.

El 26 de mayo el candidato liberal Uribe Vélez ganó la primera vuelta de las elecciones con el 53% de los votos. Es la primera vez en la historia de Colombia que un candidato ganaba

por mayoría absoluta en la primera vuelta. La abstención del total del electorado fue del 54 por ciento. Los pronósticos fueron acertados: hablaban de una victoria de Uribe en primera vuelta y aseguraban que tres cuartos de la población no deseaba una segunda jornada electoral.

El 17 de junio, ya como presidente electo, Uribe se reunió con Kofi Annan, Secretario General de la ONU, para solicitarle los buenos oficios de esta institución para reabrir el diálogo. Las FARC rechazaron la oferta de Uribe, en la que sólo vieron un plan de sometimiento. En carta abierta al presidente, el 20 de agosto de 2002, reafirmaron su posición de sólo reiniciar el diálogo si éstos tenían lugar de cara al país, si se retomaba la Agenda Común firmada con el gobierno de Pastrana; si se desmilitarizaban los departamentos del Putumayo y Caquetá, si se les dejaba de calificar como terroristas, y si se erradicaba el paramilitarismo. Eran las mismas exigencias planteadas al presidente Pastrana para reiniciar negociaciones, tres meses después de la ruptura final del proceso de paz el 20 de febrero de 2002.

El 12 agosto el presidente decretó el estado de conmoción interior. Uribe había prometido mano dura contra la guerrilla y los paramilitares para terminar con un conflicto que ya llevaba más de 39 años de existencia y que había costado la vida a más de 40 mil personas.

En las elecciones se impuso entonces, por sobre cualquier otra consideración, el hastío de la población ante tanta muerte, tanta violencia inútil, tanta negociación interminable que no conducía a nada. En Colombia se probó de todo: desde el convivir con los grupos armados y paramilitares hasta la creación de zonas de despeje para permitir la negociación con los insurgentes; desde la eliminación masiva de opositores hasta la creación de la industria del secuestro; desde la búsqueda de la paz mediante métodos pacíficos hasta la creación de grupos paramilitares. El cansancio y la rabia llevaron a los electores a darle una oportunidad a la política severa que planteó Alvaro Uribe.

No obstante, todo parecía indicar que venían tiempos difíciles. La guerrilla de las FARC estaba dispuesta a perseverar en su estrategia de enfrentamientos y secuestros, de atentados contra la infraestructura del país, de hablar de diálogo pero insistir en la guerra. Por su parte, el nuevo presidente declaró, en su primera alocución como candidato triunfador, que buscaba el diálogo con la guerrilla con mediación internacional, si ésta abandonaba el terrorismo y facilitaba un cese de hostilidades. Nada hacía presumir que eso pudiera ocurrir, por lo que el presidente Uribe tuvo razones para afirmar la falta de voluntad de los insurgentes e imponer la respuesta de las armas.

Uribe derrotó, en disidencia y apoyado por una amplia coalición, al partido Liberal. No tuvo contendiente conservador, pues el segundo partido tradicional se abstuvo de presentar candidato propio para respaldarle. Su victoria fue también la derrota de otros movimientos independientes.

La llegada al poder del nuevo presidente, supuso un cambio de estilo de la forma de conducir el país. Con un ritmo de actividad frenético, el presidente se involucró desde el principio en dos cuestiones fundamentales: el relanzamiento económico del país y en el impulso de la política de seguridad democrática con la que pretendía acabar con la situación de violencia e inseguridad que vivía Colombia.

En la conformación de su Gabinete, más técnico que político, Uribe reafirmó su independencia de las jerarquías partidistas. Nombró a liberales disidentes, conservadores e independientes que le acompañaron durante su campaña. Abrió espacios en el gobierno para sus antiguos contendores. Nombró en posiciones claves –como en la dirección de Planeación Nacional y los Ministerios de Salud y Trabajo– a destacados representantes del movimiento que respaldó la candidatura de Noemí Sanín, quien además pasó a ser su embajadora en España y nombró a Horacio Serpa, ex- candidato del oficialismo liberal, embajador ante la OEA. Éstas fueron, sin embargo, adhesiones nominales. No había en sentido estricto, un gobierno de coalición. Tampoco existía partido de gobierno, ni mayores indicios de que el presidente estuviera interesado en su eventual organización. Uribe nunca renegó de su condición liberal, ni había sido expulsado del partido.

En el Congreso, Uribe logró conformar una coalición variopinta que el ex ministro Cepeda Ulloa denominó el partido presidencial, y que apoyó, en líneas generales, su programa legislativo, aunque algunas veces con dificultades y confrontaciones. Se trataba, de todas formas, de una coalición frágil, que obedecía a una multitud de jefaturas disímiles, unidas momentáneamente alrededor del presidente. Los partidos además, si bien en crisis, no desaparecieron. Tanto el Liberal como el Conservador emprendieron algunas reformas internas.

El proyecto de referendo fue uno de los primeros actos de la Administración Uribe ante el Congreso. Presentado como una iniciativa contra la corrupción y la politiquería, el proyecto incorporó medidas fiscales orientadas a la inversión social, en particular al sector educativo. El paquete original sufrió algunas modificaciones en el proceso de discusión parlamentaria, pero fue aprobado en sus aspectos centrales. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales algunos de sus puntos, limitándolo al texto de 15 preguntas. Las propuestas de mayor significado político eran la introducción de un mínimo de votos válidos para que los partidos obtuvieran personería jurídica y la adopción de un nuevo sistema electoral para asignar bancas, ambas con el propósito de incentivar la agrupación de las dispersas fuerzas políticas, bautizadas como microempresas electorales.

Casi simultáneamente a la presentación del proyecto de referendo, varios grupos de parlamentarios propusieron en el Congreso iniciativas que desembocaron en la llamada reforma política. Esta reforma, entre otras de sus disposiciones, obligaba a los partidos a llevar listas únicas a las elecciones, con el sistema de voto preferente voluntario, y obligaba a las fuerzas minoritarias dispersas del Congreso a agruparse en partidos. Un resultado inmediato fue la integración del Nuevo Partido por algunos congresistas de origen liberal simpatizantes de Uribe, mientras otros partidos uribistas estaban también en proceso de formación. A su turno, varios congresistas ubicados a la izquierda buscaron consolidar el Polo Democrático Independiente, como un nuevo partido de oposición, frente al gobierno de Uribe y los partidos tradicionales.

Al terminar el primer periodo legislativo, en diciembre del 2002, el gobierno logró que el Congreso aprobara una serie de reformas, destinadas a desarrollar el programa presidencial en diversos frentes: tributario, previsional, laboral y financiero. Adicionalmente, el Congreso le otorgó facultades extraordinarias para reestructurar el Estado, con miras a reducir gastos, hacer más eficiente su tarea, y descentralizar sus actividades.

Los colombianos despidieron ese año con sentimientos contradictorios, entre las ilusiones alimentadas por la llegada al poder de un nuevo gobierno y las incertidumbres frente a la prolongación de un conflicto en apariencia sin fin. Aquel 31 de diciembre, desde Valledupar, la capital del departamento del Cesar, el presidente Álvaro Uribe envió a la nación un mensaje esperanzador y de confianza: "Aquí no hay vacilaciones. Aquí hay un norte. Vamos por la seguridad para que los colombianos puedan volver a vivir en paz".

COSTA RICA



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	8,633	7,847	8,575
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	7,151	7,732	8,146
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	6,552	5,250	6,500
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		2,050	1,509	1,465
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		1,514	1,202	1,039

PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL RODRÍGUEZ
PRESIDENTE ELECTO: ABEL PACHECO
ELECCIONES PRESIDENCIALES: 3-02-2002

En las últimas décadas, la vida política estuvo dominada por dos partidos —el Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido de la Unidad Socialcristiana (PUSC) — que en general se han alternado en el poder cada cuatro años. Ambos tienen un programa de corte centrista bastante similar, y sus diferencias tienden a reflejarse en su actitud hacia el ritmo de las reformas necesarias y las medidas que deben adoptarse para paliar los costes sociales de tales cambios.

Un total de 13 agrupaciones políticas se disputaron el 3 de febrero del 2002 la presidencia de Costa Rica.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) - en el gobierno - y el Partido Liberación Nacional (PLN), que postulaban a Abel Pacheco y a Rolando Araya Monge respectivamente; son las dos instituciones que han detentado la hegemonía absoluta de la presidencia del país en el bipartidista régimen político costarricense. El ascenso meteórico en las encuestas del emergente Partido Acción Ciudadana (PAC), abría la posibilidad a una inédita segunda vuelta electoral en la que cualquiera de las dos fuerzas tradicionales veía peligrar seriamente su triunfo electoral en detrimento del candidato del PAC, Ottón Solís Fallas.

La campaña presidencial costarricense estuvo marcada por el espectro, hasta ese momento desconocido, de una segunda ronda electoral. Los altos porcentajes que mostraba el PAC en las encuestas sumado a lo que podían alcanzar los demás partidos minoritarios, podía complicar a los dos partidos mayoritarios en su afán por superar el 40% de los votos que la constitución política establece como porcentaje necesario para evitar la segunda ronda electoral.

El avance de los partidos minoritarios en la aceptación del electorado también se veía reflejado en la composición de la Asamblea Legislativa, que podía estar dominada por cuatro bloques incapaces de formar mayoría individualmente, lo que obligaba al PUSC y al PLN a incluir el criterio de otros grupos con suficiente peso como para influir en el curso del debate y en la aprobación de los proyectos de ley.

Ottón Solís Fallas, que a principios de ese año había renunciado a su militancia en el PLN, tras denunciar la corrupción de sus cúpulas y las políticas económicas impulsadas, con un discurso de fuerte crítica a los manuales económicos del FMI y el BM, su oposición a privatizar empresas estratégicas como la electricidad y las telecomunicaciones y su defensa al subsidio de los productores agrícolas, había logrado ganar la simpatía de un buen sector del electorado; sobre todo de los que consideraban al alto costo de la vida, la violencia y la inseguridad, el desempleo, la pobreza y la falta de vivienda como los problemas principales que debía resolver el siguiente gobierno.

El ascenso que registró el PAC en los últimos meses previos a la elección lo colocó a pocos puntos de los candidatos presidenciales de los tradicionales Partido Liberación Nacional y Partido Unidad Social Cristiana, ambos de derecha.

El 3 de febrero de 2002 se celebraron elecciones legislativas y presidenciales; el candidato del PUSC, Abel Pacheco, obtuvo la mayoría de los votos, aunque se quedó un poco por debajo del 40% necesario para obtener la victoria directa. Por primera vez en la historia de Costa Rica, el 7 de abril se celebró una segunda vuelta electoral para decidir entre los dos candidatos mejor situados tras las elecciones de febrero y Abel Pacheco consiguió el 58% de los votos. La segunda vuelta se debió a la aparición de un tercer partido político, el Partido de Acción Ciudadana (PAC), liderado por Ottón Solís, que obtuvo en torno al 26% de los votos en febrero, en la primera vuelta. La abstención en la primera ronda fue del 31% y en la segunda del 39%, lo que refleja la creciente decepción de los votantes con el proceso político y, en particular, con la falta de capacidad de la Asamblea Legislativa actual de llevar a cabo sus funciones de manera expeditiva.

El nuevo gobierno no contó con una mayoría en el parlamento. El parlamento estaba dividido y ni el partido de gobierno ni el principal partido de oposición (Partido Liberación)

tenían una mayoría. Un tercio del total de escaños de la nueva Asamblea Legislativa era de dos grupos emergentes.

Costa Rica, aunque es uno de los países destacados y destacables del desarrollo democrático regional, vivió un año 2002 complicado por una situación de desequilibrio financiero y estancamiento económico. También la corrupción estuvo muy presente en la vida política con un escándalo de supuesta financiación irregular de la campaña electoral del presidente Abel Pacheco. En septiembre el gobierno se enfrentó a su primera crisis política cuando el presidente fue acusado de financiar de forma irregular su campaña electoral.

La situación económica siguió estando difícil, aquellos puentes del progreso, tan prometidos, quedaron a medio construir. Se pretendió modernizar el mercado de las telecomunicaciones. Se presentó una ley, pero la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo no pudieron resistir las presiones, y finalmente se retiró el proyecto de la corriente legislativa.

ECUADOR



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,122	2,376	1,694
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,154	4,108	4,311
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	5,246	3,587	2,710
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-1,287	-1,781	-2,127
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,871	-1,161	-1,506

PRESIDENTE: GUSTAVO NOBOA
PRESIDENTE ELECTO: LUCIO GUTIÉRREZ
ELECCIONES PRESIDENCIALES Y LEGISLATIVAS: 20-10-2002

Ecuador transita el año en el marco de una crisis de gobernabilidad. Es posible que para la imagen exterior la situación pareciera normalizada, a fin de cuentas el presidente Gustavo Noboa permaneció 3 años al frente del país. Sin embargo, la gobernabilidad seguía en crisis; el país no se estabilizó debido a la estructura misma del sistema político ecuatoriano. De hecho, en la elección presidencial hubo un deterioro notable de los partidos políticos lo que llevó a que ocuparan los tres primeros lugares tres tendencias claramente no partidistas. Esto implicaba que el gobierno tendría el próximo año un Congreso que no controlaría, lo que mermaría su capacidad de gestión del Estado.

Las fragilidades políticas del Gobierno eran múltiples y de variado alcance. La que más destaca fue la dificultad para formar alianzas de mayoría en el Congreso. El Ejecutivo careció de un bloque parlamentario desde el cual negociar acuerdos. Se trató de un hecho inédito en la política ecuatoriana reciente, con dos consecuencias previsibles: por un lado, un Ejecutivo con poca capacidad para incidir sobre las acciones del Congreso; y por otro, un Parlamento que estableció su agenda de modo autónomo al Gobierno. No era un escenario de pugna de poderes, pero sí de un ejercicio bicéfalo y desarticulado del Gobierno.

El país fue testigo de un juego de alianzas partidarias muy puntuales y, por eso mismo, poco duraderas en el tiempo. El escenario de formación de mayorías aparecía mucho más circunstancial y cambiante que en épocas pasadas, cuando los partidos se unían para

formar bloques de oposición o apoyo al Gobierno. El Ejecutivo pudo presentar proyectos al Congreso, pero su trámite, discusión y aprobación estaban sujetos enteramente a la voluntad de los partidos y al juego de intereses entre ellos. El Ejecutivo apenas fue un proponente de reformas, pero un débil actor para empujarlas.

Completaba el escenario político el hecho de que 2002 era un año electoral. Los partidos actuaban con un ojo puesto en el cálculo electoral. Se sabe en qué consiste ese comportamiento: tomar la mayor distancia posible del Gobierno y rechazar cualquier decisión que tenga costos para 'el pueblo'.

Ese año la presencia de determinados movimientos sociales, como el de los indígenas, por ejemplo, que en el 2000 y en el 2001 habían tenido mucha fuerza, tuvo una menor influencia. No sólo sindicatos y organizaciones populares se debilitaron, sino también gremios como las cámaras de la producción que en épocas anteriores jugaron un papel decisivo en el delineamiento de las políticas estatales.

En el 2002 se celebraron elecciones de las que salió electo presidente el ex coronel Lucio Gutiérrez, que en el 2000 había participado en un golpe contra el Gobierno de Jamil Mahuad. Catalogado como populista de izquierda, su proyecto se centró en la lucha contra los elevados índices de corrupción, pobreza y desempleo que sufre el país así como en recuperar la confianza de los inversores internacionales. En este sentido puso de manifiesto su voluntad negociación con el FMI.

El 20 de octubre se produjo la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ganó Sociedad Patriótica, con el 20,64% de los votos. En la segunda vuelta, celebrada el 24 de noviembre, Gutiérrez obtuvo la Presidencia, con el 54% de los votos. El nuevo presidente asumió el 16 de enero de 2003. El Tribunal Supremo Electoral informó que la abstención fue del 34%, porcentaje algo más alto de lo que era tradicional en el país donde el voto es obligatorio para mayores de 18 años.

Un llamado a la concertación, al diálogo y al entendimiento nacional. Ese fue el principal mensaje de Lucio Gutiérrez al comparecer ante la nación, luego de saberse ganador de la primera vuelta electoral.

La extrema debilidad del sistema de partidos políticos de Ecuador: de un lado, los clásicos partidos ecuatorianos - de derecha e izquierda - que obtuvieron una votación poco relevante, en tanto que los dos principales candidatos que compitieron en la segunda vuelta habían fundado estructuras políticas que, con el nombre de partidos, no eran sino meras organizaciones de campaña. En el caso del Coronel Gutiérrez, el partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (evocando la fecha del fallido golpe) y en el del empresario Alvaro Noboa, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). Las definiciones doctrinarias no existían en ninguno de ellos y la articulación se dio a través de un programa que se fundamentaba en la personalidad del caudillo que encabezaba cada organización.

Tras la candidatura de Gutiérrez se ubicó la extrema izquierda, integrada entre otras agrupaciones, por el Movimiento Democrático Popular, el Partido Comunista Marxista-Leninista y la Juventud Revolucionaria del Ecuador, además del indigenista partido Pachakutik y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, todos ellos protagonistas en distintas intensidades de las movilizaciones rupturistas que desestabilizaron al país en enero del 2000. Con todo, Gutiérrez no se presentó ante el electorado como el abanderado de una izquierda tradicional, sino de un amplio movimiento caudillista en medio de una campaña donde - emulando a Chávez - se presentaba vistiendo un safari verde militar que, a la vez, evocaba su pasado militar y simbolizaba una proyección autoritaria en su eventual gestión de gobernante.

Su contendiente en la segunda vuelta, Alvaro Noboa, tampoco era un candidato que provenía de los partidos tradicionales. Su pasado político se entroncaba con el del ex Presidente Abdalá Bucaram, en cuya breve administración encabezó la Junta Monetaria. Sus planteamientos programáticos lo situaban en un populismo de derecha que, aun cuando en menor grado, inquietaba también a los organismos financieros internacionales.

Tras el triunfo del coronel Lucio Gutiérrez, entonces, Ecuador entró a un complejo escenario donde primaron los componentes de crisis más que los de estabilidad.

En primer lugar hay que destacar el perfil de los ganadores: la coalición de la Sociedad Patriótica 21 de Enero, partido caudillista formado tras el liderazgo de Gutiérrez y el Movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en su declaración de principios, indicaba que rechazaba el modelo económico impuesto por la globalización neoliberal haciendo presente que su vigencia favorecía los intereses de “las grandes potencias y del capital financiero”. Se añadía que las fracciones más opulentas de la clase dominante habían sufrido una quiebra ética y moral que las descalificaba para seguir ejerciendo el gobierno.

Como alternativa al denominado “modelo neoliberal” proponían un conjunto de políticas alternativas, tales como la distribución de la propiedad, la planificación estratégica de la economía y el apoyo estatal al desarrollo de la agricultura y de la industria.

El movimiento Pachakutik, por su parte, además de indigenista, se definía como un actor que recuperaba “valores del marxismo y del cristianismo revolucionarios”, propiciando no pagar la deuda externa, combatir “las políticas que impone el FMI”, relativizar la vigencia del derecho de propiedad privada a través de una reforma agraria “contra el latifundio” y de la revisión de las privatizaciones e incrementar las dimensiones del Estado a través de la “nacionalización” de recursos naturales.

Una segunda fuente de conflictos radicaba en el carácter minoritario que tuvo el nuevo gobierno con relación a las fuerzas parlamentarias. La coalición Sociedad Patriótica – Movimiento Pachakutik, sólo contaba con 13 diputados de un total de 100 curules de la Asamblea Nacional. A este número se le podían agregar los 15 representantes del Partido Roldosista (populista) y otros cinco de diversas agrupaciones menores de la izquierda radical. En total 33, es decir, un tercio parlamentario que resultaba insuficiente para gobernar. En consecuencia, Gutiérrez debía negociar con otras fuerzas políticas un pacto de gobernabilidad, que posibilitara impulsar su propuesta programática. Esto no fue fácil, pues mientras más radical y confrontacional era su discurso político más difícil era buscar convergencias sólidas y permanentes.

Una tercera fuente de conflicto se derivó del radicalismo étnico que caracterizaba a uno de los partidos ejes de la coalición de gobierno. El movimiento Pachakutik, efectivamente, tenía una larga tradición en promover movilizaciones confrontacionales que denominaba “levantamientos”, varias de las cuales tuvieron un alto componente de violencia, como la que antecedió –por ejemplo – al derrocamiento del Presidente Mahuad. Los indigenistas se oponían a varios proyectos de inversión argumentando consideraciones ecologistas o de defensa de “identidades ancestrales”. Sentían que habían llegado al gobierno y se convertían, por lo mismo, en un grupo de presión interno que no dejaría que Gutiérrez abandonara, eventualmente, sus promesas para con estos grupos.

En el 2002 los problemas sociales y económicos no encontraron una respuesta satisfactoria: se mantuvo una inflación muy alta, la recuperación del aparato productivo no se registró y, a pesar de que hubo cierta estabilidad en algunos rubros de la economía, había problemas como el déficit en la balanza comercial, de alrededor de 1.500 millones de dólares, y el déficit en las arcas del estado ascendía a más de 1700 millones de dólares. La economía ecuatoriana se sostenía debido al alto precio del petróleo y por las remesas de los emigrantes.

Esa compleja trama política volcada a la administración de las instituciones del Estado hacen presagiar que el año político no logra superar la crisis de gobernabilidad que arrastraba el país, sino que sumándole nuevos componentes y nuevos conflictos permanece en el tiempo sin agregar calidad al proceso democrático.



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	4,452	6,273	5,544
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,889	5,040	4,850
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	5,642	7,383	6,200
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-1,119	-0,712	-0,573
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		0,492	0,836	0,610

PRESIDENTE: FRANCISCO FLORES

La población observaba el acontecer nacional con indiferencia. Del desánimo y la frustración primeras pasaron a un segundo estadio de la apatía y escepticismo. Contrario a las insistencias del presidente Flores, no son pocos los que pensaban que el país carecía de rumbo y que las posibilidades se habían agotado. Frente a este panorama, muchos se preguntaban qué hacer.

Los dos partidos grandes adoptaron la opción de alimentar la confrontación política y social como línea política fundamental. La política de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tenía como propósito destruir al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), su adversario principal, para así imponer su visión del país sin contratiempos; éste, por su lado, reaccionó en términos similares. Esta confrontación política mantuvo a la sociedad dividida en tercios: el que simpatizaba, aunque de una manera difusa, con el gobierno y ARENA; el contrario al gobierno y ARENA, el cual no se aglutinaba necesariamente alrededor del FMLN, pues no tenía la capacidad de su contrincante para reunir a quienes estaban en su contra, y el que se mantenía al margen de estas alternativas. Estas divisiones, en apariencia irreconciliables, imposibilitaban cualquier acuerdo social e incluso legislativo. Aunque el acuerdo era necesario para resolver los graves problemas nacionales, los dos partidos grandes apostaban a derrotarse para imponer, desde el poder, sus ideas. Los dos se consideraban mutuamente excluyentes. Así, enfrascados en su lucha, ambos dejaban de lado a los más de dos millones de salvadoreños que vivían en la indigencia y la pobreza.

Esta dinámica de neutralización de fuerzas y bloqueo recíproco hizo que El Salvador perdiera la poca capacidad que había adquirido, a comienzos de la década de los noventa, para decidir sobre asuntos fundamentales. Cualquiera de los dos partidos grandes que pretendía la aprobación de un proyecto de ley, debía hacer alianza con los otros. Sin embargo, en la práctica, ARENA tenía el control, porque el FMLN había mostrado no tener capacidad para hacer tales alianzas. Esta situación se prestaba al tráfico de votos en la Asamblea Legislativa, a cambio de cuotas de poder y dinero. Sin duda, esta situación es incómoda para ARENA, que se disponía a reconquistar su independencia en las elecciones siguientes, para lo cual debía conseguir la mayoría de los escaños legislativos.

Fue así que la vida política de El Salvador se caracterizó por el rompimiento de esquemas tradicionales, nuevas alianzas y renovación de líderes. La extrema izquierda quedó prácticamente en manos del Partido Comunista, que procedió a una purga de disidentes y al endurecimiento de sus posturas. El FMLN apostó al bloqueo casi total de las iniciativas y programas del gobierno, pero sin conseguir que se cayera en la ingobernabilidad, gracias a la separación de los llamados "renovadores".

Este endurecimiento y la adopción de una estrategia de desorden callejero, violencia sindical y el actuar de grupos de choque como la BRES, se agudizó con la huelga de los médicos sindicalizados del Seguro Social. Prácticamente los huelguistas habían secuestrado la salud de los trabajadores salvadoreños, abandonando enfermos y obstruyendo la prestación de servicios. La huelga coincidió con un nuevo brote de dengue que con un sistema sanitario colapsado, sólo pudo ser controlado gracias a la ayuda exterior.

Fue un año caracterizado por un realineamiento de los partidos materializado en preparación de estrategias para las elecciones legislativas y municipales de 2003.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento Renovador y el Partido Socialista Democrático (PSD) trataron construir un agrupamiento de centro izquierda que fuera una opción en las elecciones legislativas y municipales. Firmaron “la agenda de los seis puntos” e invitaron al Centro Democrática Unido (CDU), AP y al PAN (ambos partidos actualmente desaparecidos) para formar parte del bloque. El PAN fue claro en decir que era un partido de derecha.

EN el 2002 se incrementó el descrédito de los diputados. A pocos días de que se oficializara su incorporación al PCN, el diputado nacional Orlando Arévalo encabezó una ola de protestas de ex patrulleros que exigían al Gobierno una indemnización por los años laborados en la guerra. En un procedimiento inusual, la Policía capturó a Arévalo cuando iba hacia la Asamblea y lo entregó esposado a los miembros de la junta directiva. Al legislador lo custodiaron más de 100 policías. Ese despliegue de fuerza y señalamientos de violación a los derechos humanos contra el proceder de la corporación, hicieron que los diputados conformaran una comisión especial para destituir a Mauricio Sandoval, director policial. Antes de conocerse el informe final de ese equipo de trabajo, el PCN negoció con ARENA la presidencia de la Corte de Cuentas a cambio de la continuidad de Sandoval.

En otro orden, la violencia y la inseguridad alcanzaron índices alarmantes. El Salvador en el IID-Lat 2004 alcanza uno de los mayores índices de inseguridad, después de Honduras. A pesar de los significativos avances logrados, reconocidos a nivel internacional, la evolución del proceso político debió afrontar todavía retos importantes. Por una parte, se llevó a cabo el proceso de desmilitarización, aunque la imagen pública de varias de las nuevas instituciones, como por ejemplo la del sistema de administración de justicia y de la Policía Nacional Civil no se logró consolidar plenamente.

En lo que respecta al sistema electoral, existían normas e instituciones de competencia que dieron lugar a la alternancia del poder en numerosos municipios, entre ellos el más importante y emblemático, la capital San Salvador, así como en el órgano legislativo (mayoría relativa del principal partido de la oposición, el FMLN, en la Asamblea Nacional). Por lo demás se mantuvo el pluralismo, si bien el país presentó al mismo tiempo un grado de polarización todavía alto que se expresó en los dos partidos dominantes: ARENA (el partido del Gobierno) y el FMLN, partidos surgidos de los bandos opuestos en el último conflicto armado. En este marco se mantuvieron determinadas divergencias de opinión respecto del modelo socioeconómico y político que deseaban las principales fuerzas políticas del país, debate que en ocasiones retrasó el ritmo de consolidación de la democracia, produciendo factores de incertidumbre para los agentes económicos y sociales.

El reto más importante fue probablemente la seguridad ciudadana. Para explicar este fenómeno se mencionan diversos factores, como las secuelas de la guerra, la impunidad y la falta de consolidación del Estado de Derecho, la pérdida de valores fundamentales para la coexistencia social, la pobreza y la falta de oportunidades, así como “una cultura de la violencia” y la influencia de la delincuencia organizada internacional.

Un hecho político significativo de ese año fue la celebración en marzo, en San Salvador, de una cumbre centroamericana a la que asistió el presidente estadounidense, George W. Bush, para promocionar un tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y siete países de la región. Bush agradeció también al gobierno de Flores haber ordenado una congelación de bienes de sospechosos de terrorismo, y fortalecer su seguridad fronteriza luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El presidente norteamericano proclamó a El Salvador un íntimo amigo y aliado, e hizo notar que el país se mantenía como un miembro inmovible de la coalición internacional contra el terrorismo.

Uno de los mensajes económicos más claros derivados de las declaraciones del presidente Bush en su visita al país fue su interés en promover una rápida negociación de un Tratado de Libre Comercio con los países centroamericanos. Inclusive dejó abierta la posibilidad de poder negociar bilateralmente con aquellos países que cumplieran con “las condiciones del estado de derecho, de (respeto a la) propiedad privada”.

Otro tema central para la región, el abordaje del tema migratorio, en cambio, apareció como algo incierto para los centroamericanos, exceptuando a los nicaragüenses, y siguió siéndolo, aun después de las declaraciones del Presidente Bush en El Salvador. Para El Salvador este tema era especialmente delicado, debido a que sus emigrantes enviaban remesas, las cuales se habían convertido en uno de los pilares de la integración de El Salvador con la economía global. El otro pilar era el de la maquila textil. Las remesas representaban cerca del 15% del PIB, cubrían cerca de un 90% del déficit de la balanza comercial y se habían transformado en el principal medio de vida de gran parte de la población residente en el país.

Guatemala



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,884	2,928	3,992
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	2,406	3,470	4,897
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	5,588	3,667	5,608
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-0,975	-1,541	-1,598
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		0,750	0,261	0,249

PRESIDENTE: ALFONSO PORTILLO

Guatemala padeció un conflicto civil durante más de 30 años, hasta que las fuerzas armadas y la oposición armada acordaron los trascendentales acuerdos de paz de 1996. La llegada a la presidencia de Alfonso Portillo en el año 2000 marcó el regreso al poder del Frente Republicano Guatemalteco, partido estrechamente vinculado a las fuerzas armadas. La opinión de muchos era que su gobierno estaba controlado por el general Efraín Ríos Montt, presidente del Congreso y jefe militar durante uno de los peores periodos de represión, y por las «estructuras paralelas de poder» vinculadas a él.

A fines de 2001, había aumentado la desconfianza de la población y los cuestionamientos internacionales hacia el régimen del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

La sociedad aplaudió que el Gobierno se comprometiera con el Grupo Consultivo para aprobar las leyes financieras, la de Desarrollo, el Código Municipal y la de los Consejos de Desarrollo, aunque expresó su preocupación porque sigan sin resolverse algunos problemas, como la falta de seguridad, transparencia, mejor calidad de educación y servicios de salud, así como la falta de empleo.

Durante el año 2002, el país se enfrentó a numerosas denuncias de corrupción (tanto en el sector público como en el privado) y a duras críticas, provenientes fundamentalmente, de los Estados Unidos, por el aumento del narcotráfico. De hecho en octubre de ese año Otto Reich, Secretario Asistente para Asuntos de América Latina, aseguró que en Guatemala el Gobierno tenía vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Esto unido al clima de

inseguridad y a la crisis económica, provocó que en octubre, los sondeos apuntasen que el 70% de los guatemaltecos reprobaba la gestión del presidente Portillo.

Por otro lado, el 13 de febrero, el Tribunal Supremo español admitió a trámite el recurso presentado por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, contra la decisión de la Audiencia Nacional española de archivar la querrela contra seis altos jefes militares y dos civiles por genocidio, terrorismo de Estado y torturas. En octubre, la Fundación Rigoberta Menchú, denunció tres nuevos casos de religiosos españoles asesinados por los militares entre 1981 y 1991.

En marzo, Portillo y su vice presidente, junto a otros dos altos funcionarios del Ejecutivo, fueron implicados en la apertura de 13 cuentas bancarias y 4 empresas «de cartón», en Panamá, que utilizarían para trasladar fondos públicos. Desde que asumió la presidencia, su gobierno fue cuestionado en por lo menos diez graves casos relacionados con anomalías que sumaban casi tres mil millones de quetzales; esto no incluía los nuevos escándalos, como el caso de las cuentas en Panamá. El país vivió una ola de movilizaciones encabezadas por el Movimiento Cívico por Guatemala a raíz de estas denuncias de corrupción.

Sobre el controvertido Estado Mayor Presidencial hay que señalar que la ONU, las ONG, partidos políticos y otros actores sociales venían reclamando su disolución, no obstante haber quedado trunca en el referéndum de 1999, y que el mismo Portillo había incluido el asunto en su agenda de gobierno durante la campaña electoral y en el discurso de toma de posesión en aras del cabal cumplimiento del Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y la Función del Ejército en una Sociedad Democrática (AFPC).

Lo que propuso Portillo fue reemplazar el EMP por una entidad civil sin funciones de inteligencia ya existente, la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República (SAAS), mientras que las labores informativas las asumiría la Secretaría de Análisis Estratégico (SAE), también de fuero civil. Sin embargo, el EMP continuó funcionando y qué duda cabe que retuvo su preponderancia en el aparato presidencial. Es más, se aumentó su presupuesto.

Por lo demás, los informes de seguimiento emitidos por la MINUGUA y la representante especial del secretario general de la ONU sobre la cuestión de los defensores de los Derechos Humanos en todo el mundo, Hina Jilani, contenían poderosos indicios de que antiguos miembros de los institutos armados del Estado e integrantes de grupos paramilitares estaban volviendo a las andadas al calor del clima de inseguridad reinante.

El gobierno siguió recurriendo al ejército para intervenir en operaciones de control policial. La persistente influencia del general Ríos Montt y sus seguidores, y el hecho de que no se hubiera procesado a los responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado salvo en unos cuantos casos muy reñidos, animaron a los perpetradores y a otros a abusar de su autoridad y cometer nuevos abusos con impunidad.

En octubre, Guillermo Ovalle de León, de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, fue abatido a tiros en la Ciudad de Guatemala. Manuel García de la Cruz, que participaba activamente en los esfuerzos de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) para conseguir la exhumación de restos enterrados en fosas comunes en las zonas de Guatemala habitadas por grupos indígenas y para proteger los derechos de estos grupos, fue secuestrado, torturado y muerto en septiembre en el departamento de El Quiché. Aumentaron los abusos contra los que presionaban para que se cumplieran los acuerdos de paz en lo relacionado con los derechos sobre la tierra.

Si bien la comunidad internacional estuvo al tanto de los gastos del Gobierno del FRG, mediante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gasto ejecutado durante ese año no fue de calidad. De cada quetzal que se aportó al fisco, 76 centavos se utilizaron para pagar salarios, 16 para cancelar deuda y sólo 8 para inversión productiva.

El presupuesto inicial aprobado por el Congreso para el 2002 fue de Q23 mil millones; al finalizar el año, el gasto casi llegó a los Q25 mil millones. Asimismo, causó alarma las millonarias transferencias al Estado Mayor Presidencial, EMP, y al Ministerio de la Defensa.

El gasto del Ejército superó los Q1, 238 millones, y el del EMP llegó a los Q153 millones. Este último rubro era destinado exclusivamente para la seguridad del presidente Alfonso Portillo y su familia, incluyendo los gastos particulares del mandatario, tanto en el país como durante sus viajes al extranjero.

Para ese año, el Gobierno decretó un aumento salarial del 14 por ciento para los trabajadores no agrícolas, y de 16 por ciento para los del agro. La medida causó molestia en el sector privado, que recurrió nuevamente a los despidos para hacerle frente a esta exigencia.

Para la clase trabajadora, la medida se vio empañada por la decisión gubernamental de elevar, en diciembre, los aranceles de importación de materias primas y otros productos básicos. Ese hecho comenzó a provocar alzas en precios de productos, tan básicos como el pan y los cereales.

En síntesis, Portillo siguió encajando malas noticias procedentes de diversos ámbitos. El rosario de anomalías, irregularidades y presuntos actos de corrupción gubernamental con cientos de millones de dólares de dinero público de por medio parecía no tener fin. Luego estaba el ritmo de la economía, que en 2000 creció el 3,6%, en 2001 se contrajo exactamente a la mitad y en el tercer año presidencial fue incapaz de remontar el 2%, un valor inferior al del crecimiento demográfico, con la consiguiente evolución negativa del PIB por habitante. El sector exportador cafetalero estaba en recesión aguda y las inversiones también menguaban. La deuda pública externa marcaba los 2.800 millones de dólares, 500 millones más que al comienzo del mandato, y el enjuague del déficit fiscal hasta el 1% del PIB parecía haber llegado a su tope. A su vez indicadores sensibles de la situación social, tales como la mortalidad infantil (53 por mil), el nivel de inversión en salud (1,1% del PIB) y en educación (2,6% del PIB), alcanzaban valores que colocaban al país entre los países de peor performance de la región

Semejante caudal de conmociones ya era suficiente para mantener a Portillo en un permanente estado de tensión o preocupación. Pero al desplome de su popularidad contribuyó además todo el alboroto y la crispación que envolvía a la persona de Ríos Montt, cuyas explosivas y porfiadas declaraciones, su renovada ambición presidencial no obstante un impedimento constitucional que estaba meridianamente claro, sus maniobras subterráneas de poder, sus contratiempos con la justicia y su tenebroso pasado nunca olvidado convirtieron al presidente en el rostro amable del FRG, en la visión más benigna, o en el pelele del septuagenario caudillo, en el análisis más acerbo, finalizando el año con una situación política revulsiva que sólo preanunciaba una nueva tormenta.

HONDURAS



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	4,142	4,098	3,107
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles ^{5,228}	4,592	4,682	5,788	4,789
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	5,228	4,650	3,400
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-0,631	-1,125	-1,123
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,995	-1,117	-0,853

PRESIDENTE: RICARDO MADURO

En enero de 2002, Ricardo Maduro asumía como presidente, después de su victoria en las elecciones del 25 de noviembre de 2001, en la que Ricardo Maduro, por el Partido Nacional, obtuvo el 52,9% de los votos y derrotó a Rafael Pineda por el Partido Liberación, que había alcanzado el 43,4% del total de la votación.

Dentro de su programa de gobierno se estableció como prioridad el control de la delincuencia y la impunidad, bajo el programa de "cero tolerancia hacia el crimen". Adicionalmente el gobierno fue realizando un severo ajuste fiscal, con el fin de cumplir con las metas establecidas con el FMI y lograr la extensión del acuerdo vigente. Por lo anterior, en mayo de 2002, el Congreso aprobó la reforma tributaria con la que se buscaba aumentar la base gravable, disminuir los niveles de evasión y reducir el gasto del gobierno. Adicionalmente, se trabajó en la propuesta de reforma al sistema de seguridad social, a través de la cual se pretendía disminuir la carga previsional.

Sin embargo, la política fiscal restrictiva, el aumento del desempleo y los pocos resultados del programa antidelinuencia se tradujeron en menores niveles de popularidad del gobierno. En los primeros meses de mandato, el gobierno no tuvo gran éxito en su programa de control de la delincuencia y el deterioro de las condiciones económicas se reflejó en mayores niveles de desempleo. Adicionalmente el ajuste fiscal generó malestar dentro de la población y se tradujo en manifestaciones públicas en contra del gobierno. Por otra parte, a pesar de la coalición política entre el partido de gobierno y el Partido Demócrata Cristiano, el gobierno enfrentó un importante nivel de oposición en el Congreso, lo que redujo su margen de maniobra.

En las elecciones parlamentarias el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano unidos habían obtenido el 50,6% de la votación. Por su parte, los partidos de la oposición, tales como el Partido Liberal, Partido de Innovación y Unidad y Unificación Democrática habían obtenido el 49,4%. Lo anterior implica que así el partido de gobierno contaba con la mayoría absoluta en el Congreso mediante la coalición política con el PDCH, igual enfrentó una importante oposición.

Los diputados terminaron el año legislativo más desacreditados que nunca ante la población, legislando para grupos reducidos vinculados con los organismos financieros internacionales. Y lo concluyeron recetándose más de 600 dólares de aumento salarial.

Pese a medidas adoptadas prácticamente a pocas horas de iniciado su mandato, la violencia e impunidad con que operaron las pandillas juveniles fue un aspecto de la seguridad ciudadana que escapó al control del presidente Ricardo Maduro, a lo largo del primer año de gobierno. Maduro afirmó que en sus primeros doce meses de gestión se logró reducir los secuestros, los asaltos a personas, el asalto a negocios, el robo de vehículos. El presidente destacó que cuando asumió "todas estas tendencias se encontraban en franca ascendencia".

Transparencia Internacional calificó al sistema judicial hondureño como la institución más corrupta del país. Ese año, los tres magistrados de la Corte de Apelaciones de la capital fueron destituidos por sobornos, contubernios y tráfico de influencias.

Maduro prometió también una reforma profunda en la economía, pero finalizó el año con un pobre resultado: apenas puso en marcha algunas medidas destinadas a paliar la crisis fiscal heredada de la anterior administración de Flores Facussé. En 2002, Honduras importó 3 mil millones de dólares y exportó menos de 1 mil 400 millones.

En una de sus primeras medidas económicas, el equipo de Maduro logró que el Congreso aprobara la Ley de Equilibrio Financiero y Compensatorio, bautizada por los hondureños como "el paquetazo de Maduro". Con esta medida, el gobierno buscó recaudar, por la vía de impuestos directos a la población, más de 100 millones de dólares.

Ante las presiones de las centrales obreras, el gobierno decidió aprobar un nuevo salario mínimo. Para evitar la inflación, los sectores de trabajadores organizados lograron que, dentro de los acuerdos que establecieron el salario mínimo, se aprobara el congelamiento del precio de los 16 productos esenciales de la canasta básica. Pero, una vez en vigencia el

nuevo salario mínimo los precios congelados se dispararon, con lo que el gobierno acentuó su propio desgaste adjudicándose otro punto negativo en lo económico.

El gobierno de Maduro heredó de Flores Facussé un conflicto con el magisterio que se agudizó durante el año, constituyéndose en su mayor piedra de tropiezo. El incumplimiento por parte de gobierno del Estatuto del Docente provocó manifestaciones masivas, choques y revueltas por todo el país.

En la primera semana de octubre el Congreso Nacional sorteó los primeros dos debates para la aprobación de una nueva Ley de Aguas denominada Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento. Un tercer debate más y se cumpliría el procedimiento parlamentario para que el proyecto se convirtiera en una nueva ley, que en sus 65 artículos aseguraba la privatización, concesión y municipalización del agua. Sin embargo, el Congreso Nacional clausuró su año legislativo el 14 de noviembre y el proyecto de Ley de Aguas no pasó de su segundo debate.

Los congresistas del mayoritario Partido Nacional, en alianza con los congresistas del Partido Demócrata Cristiano marchaban al ritmo que aseguraba la aprobación de dos leyes, de la ley de aguas y una nueva ley forestal. Aprobándolas, cumplirían con los compromisos asumidos por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, cuya misión llegaría a Honduras en la primera mitad de noviembre.

La ley de aguas debía ser la primera en aprobarse para, seguidamente, avanzar con la aprobación de la ley forestal y así continuar con la privatización de la telefonía, los servicios de salud y los de educación. Sin embargo, el proceso quedó estancado en el segundo debate de la ley de aguas y la misión del FMI se encontró con estos compromisos legislativos incumplidos.

El 4 de octubre, una asamblea de dirigentes de patronatos y de organizaciones sociales y populares decidió comenzar acciones de presión para impedir la realización del tercer debate programado para esa misma semana. Con un documento firmado por un centenar de comunidades y barrios del municipio expresaron su total rechazo a la aprobación de la ley.

Para el 12 de octubre se logró que en los contenidos de las movilizaciones del Bloque Popular en Tegucigalpa y en otros municipios del país con ocasión de los 510 años de la Conquista de América, se expresara el rechazo a la ley de aguas como una concreción del rechazo popular al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El Bloque Popular convocó para el 24 de octubre a una marcha de protesta en Tegucigalpa con dos temas: el rechazo a la ley de aguas y la defensa del Estatuto del Docente.

El Presidente advirtió guerra para las organizaciones populares, en el mismo tono con el que meses atrás había declarado la guerra a la delincuencia. A pesar de esto, las manifestaciones en contra de la ley de agua y de la ley forestal y en defensa del Estatuto del Docente continuaron. Finalmente, Maduro convocó y se reunió con los representantes de las protestas populares para asegurarles que iniciaría un proceso de diálogo y negociación y que quedaba en suspenso la aprobación de las leyes propuestas en el Congreso Nacional.

El gobierno hondureño se encontró inesperadamente entre dos presiones. Por un flanco, este movimiento de protesta nacional que obligó literalmente a los diputados y al gobierno a escucharlos y a detener la carrera para actualizar la legislación hondureña. Y por el otro, las presiones del Fondo Monetario Internacional.



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	6,136	6,623	6,340
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	4,708	5,326	4,897
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	4,799	5,575	5,608
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		0,910	1,007	1,009
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		1,856	1,337	1,167

PRESIDENTE: VICENTE FOX

A dos años del cambio político en México había cierto desencanto. Por un lado las expectativas que se habían generaron con la victoria electoral de 2000 no se materializaron y, por el otro, había frustración ante la parálisis que vivía México con respecto a las reformas estructurales. En este aspecto, la falta de acuerdos y consensos políticos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo le hacían daño al país. Basta resaltar el fiasco que resultó la Reforma Fiscal que proponía dotar al país de más recursos para la inversión pública, así como generar incentivos para incrementar el ahorro interno, avanzar en un federalismo corresponsable y buscar desp petrolizar el presupuesto. Por otro lado, la Reforma Eléctrica no prosperó para hacer a este sector más competitivo, y quedaron en el tintero de los buenos deseos la Reforma al sector de Telecomunicaciones y la Reforma Laboral.

En el 2002 el país ingresó como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas defendiendo la legitimidad de la ONU para resolución de la crisis de Irak. Las relaciones con Estados Unidos se volvieron controvertidas y se avanzó poco en temas de agenda bilateral como emigración o el Tratado de Libre Comercio.

En el segundo año de gobierno del presidente Fox, la política interna se centró en la armonización de la legislación nacional con el derecho internacional, la cooperación con organizaciones internacionales y el diálogo con la sociedad civil. Se creó una unidad de derechos humanos en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Los debates relativos a la reforma del Estado para reforzar la protección de los derechos humanos continuaron, aunque las propuestas definitivas seguían pendientes al acabar el año. La mayoría de los gobiernos de los 31 estados mexicanos, en cuya jurisdicción se cometían muchas violaciones de derechos humanos, no afrontaron seriamente los abusos. A pesar de la política y las iniciativas adoptadas por el gobierno federal, todavía no se habían abordado las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos.

En el ámbito internacional, el gobierno mexicano desempeñó una importante función en la promoción de asuntos relacionados con los derechos humanos. El gobierno mantuvo su apoyo a la Corte Penal Internacional y adoptó medidas para la ratificación del Estatuto de Roma. Sin embargo, el Senado impuso condiciones para aprobar la ratificación que, en la práctica, podrían obstaculizar la labor de la Corte y suponer el incumplimiento de las obligaciones contraídas por México en virtud del derecho internacional.

En ese segundo año de gobierno del presidente Vicente Fox, resulta oportuno reflexionar sobre la situación que vivía la economía mexicana.

Ante un entorno mundial por demás complicado e incierto, la actividad económica en México se vio afectada. El crecimiento real promedio del PIB para el año se ubicó en un 1,3 por ciento.

Ante esta coyuntura difícil, el gobierno del presidente Fox se esforzó en consolidar los fundamentos económicos. De hecho, el camino hacia la convergencia económica con los principales socios comerciales de México continuó por buen sendero. El manejo prudente de las políticas fiscal y monetaria fue fundamental para que tanto la inflación como las tasas de interés se ubicaran en niveles históricamente bajos. Esto permitió una reactivación del crédito al consumo. El peso, por su parte se mantuvo estable en el marco de la libre flotación en que se encontraba desde hace seis años. Aunado a lo anterior, México incrementó notablemente sus reservas internacionales, las que se ubicaron en más de 45.000 millones de dólares. Por su parte, el déficit en cuenta corriente se encontró en niveles manejables y se financió principalmente con flujos de inversión extranjera de largo plazo. Sin duda, la obtención del grado de inversión a principios del 2002 en la calificación crediticia de México obedeció a la mayor solidez de la economía.

Sin duda, al presidente Fox y a su equipo les había tocado aprender a gobernar un México en plena mutación política y que necesitaba formalizar nuevos arreglos institucionales que garantizaran la gobernabilidad futura del país. Los últimos dos años le sirvieron mucho a México al consolidar su democracia y la alternancia del poder. Asimismo, se logró fortalecer los fundamentos económicos y avanzar en el Estado de Derecho y en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esto era insuficiente ante la dimensión de los retos por superar. Por ello, era fundamental generar los consensos para que México pudiera alcanzar los niveles de seguridad y competitividad que consolidaran su desarrollo.

NICARAGUA



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,614	4,230	2,963
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	4,958	5,232	4,054
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	3,866	5,933	4,550
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-1,432	-1,213	-1,196
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,090	-1,392	-1,482

PRESIDENTE: ENRIQUE BOLAÑOS

En el 2002 el país se enfrentó a graves escándalos de corrupción que afectaron tanto al ex presidente Alemán como al nuevo presidente electo a fines del 2001, Enrique Bolaños (del mismo partido político que Alemán), que fue acusado de utilizar fondos públicos para la financiación de su campaña electoral.

A lo largo de 2002, durante su primer año de gobierno, Enrique Bolaños dedicó grandes esfuerzos a "limpiar la casa" desde el Poder Ejecutivo. El descrédito y la desconfianza que Nicaragua inspiraba en la comunidad internacional, motivados por la corrupción institucionalizada por el gobierno de Arnoldo Alemán, lo exigía. Las limitaciones económicas y financieras del país le impedían a Bolaños cumplir promesas traducibles en mejoría económica para la población, y esto sugería enarbolar alguna bandera que mantuviera la confianza y movilizara esperanzas mientras se "ponía orden" en el descalabro económico

heredado. La lucha contra la corrupción se convirtió así en la “hoja de ruta” del gobierno Bolaños en su primer año de gestión.

Sin embargo a mediados de año, la ruta seguida era tan ambigua que perdió toda credibilidad. Bolaños hizo relevo de banderas y funcionaba ya con otra “hoja de ruta”, que era económica. Más exactamente, geoeconómica: el Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos había diseñado para la región marcó el rumbo.

El 2002 acabó con una baja popularidad del presidente debido a la grave crisis política, económica y social que atravesó el país. La lucha política en torno a la figura del ex presidente Alemán dominó el escenario político e institucional del país.

Una nueva mayoría parlamentaria destituyó el 19 de septiembre a la junta directiva de la Asamblea Nacional que presidía Alemán, después de que ésta rechazara en dos ocasiones analizar el pedido de desafuero del ex mandatario, acusado de varios delitos de corrupción.

Los dirigentes liberales condicionaron su participación en un diálogo en busca de un consenso nacional, al retorno del ex presidente, Arnoldo Alemán, a la presidencia de la Asamblea Nacional, de la que fue destituido.

El opositor Daniel Ortega planteó resolver la crisis política e institucional en una serie de instituciones, incluida la Asamblea Nacional, para después hacer un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, las fuerzas políticas, y la sociedad civil en el ámbito económico y social.

En diciembre de 2002, la Asamblea Nacional despojó al ex presidente Arnoldo Alemán de su inmunidad parlamentaria como diputado para poder ser procesado por blanqueo de dinero y otros delitos, y días más tarde el ex presidente fue puesto bajo arresto domiciliario.

Los principales problemas de la agenda económica y social, pobreza, desempleo, salud y educación quedaron relegados y los resultados recogidos por el IDD-Lat 2004 muestran indicadores entre los peores de la región, como por ejemplo una pobreza del orden del 58%.

PANAMÁ



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	6,914	8,028	8,309
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	4,320	7,558	7,594
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	7,500	7,875	8,108
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		1,418	0,595	0,733
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		0,589	0,028	0,182

PRESIDENTE: MIREYA MOSCOSO

La coyuntura panameña estuvo marcada por acuerdos militares con EEUU y por la agudización de la crisis armada desatada en el vecino país de Colombia. También por los proyectos de privatización de la Caja de Seguro Social y por las propuestas para usar el Fondo Fiduciario de Desarrollo para pagar la deuda externa. Además, el momento político fue remecido por las denuncias de soborno en los órganos del Estado así como por la corrupción que se denuncia en todos los sectores políticos del país.

En enero, la presidenta Mireya Moscoso nombró una comisión especial anticorrupción que redactó las líneas maestras contra las prácticas corruptas. El documentó salió en marzo haciendo hincapié en la reforma de la Constitución.

Sin embargo la corrupción marcó la administración de Mireya Moscoso. Uno de los casos de soborno más relevantes en el gobierno fue un pago a la Asamblea Legislativa para aprobar un contrato-ley sobre la construcción de un millonario centro industrial en la norteña provincia de Colón.

En otro caso hubo supuestos pagos a legisladores para que ratificaran al ex ministro Winston Spadafora y al ex legislador Alberto Cigarruista como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El expediente donde estaban estas denuncias fue archivado por la Corte Suprema de Justicia, lo que generó fuertes críticas de algunos sectores sobre la falta de efectividad del sistema judicial.

La ausencia de una mayoría en el Congreso limitó la gobernabilidad de la administración Moscoso. El gobierno no contó con el apoyo necesario para dar curso a las reformas que hacían parte de los acuerdos suscritos con el FMI. En marzo de 2000 se suscribió un acuerdo Stand-by con el FMI que incluían la aprobación de la reforma tributaria, la obtención de un déficit fiscal cero, la reforma del Banco de Desarrollo Agropecuario, entre otras.

La mayoría de estas metas no se pudieron cumplir por el juego de la oposición en el Congreso.

Aunque el nivel de popularidad del gobierno de Mireya Moscoso se redujo (las encuestas de opinión de ese año mostraban un alto grado de inconformidad con el manejo económico del gobierno) aún se mantenía en niveles adecuados.

Las políticas del gobierno no lograron frenar el nivel del desempleo, que se incrementó levemente durante ese año, alcanzando el 16,5%.

PARAGUAY



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	1,689	3,214	2,255
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,543	3,572	3,779
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	2,029	3,953	1,477
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-1,080	-0,318	-0,376
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-1,115	-0,779	-0,369

PRESIDENTE: LUIS GONZÁLEZ MACCHI

Durante el año 2002 la política del país se caracterizó por un aumento de la desconfianza de la población hacia la clase gobernante, como consecuencia de la ingobernabilidad política, que sumada a la crisis económica dio como resultado la inestabilidad política y el incremento de la inseguridad y la delincuencia en el país.

En el 2002, la economía del país experimentó un deterioro mayor que en años anteriores. Según datos del Banco Central del Paraguay, la tasa de inflación fue del 14,6%, casi el doble que la registrada al final del 2001 cuando fue de 8,4%, lo que sumado a la caída de la

economía ubicó al Paraguay como una de las economías con más bajo nivel de ingreso per cápita de toda América Latina. El fuerte incremento de pusieron en jaque a la economía y a la política.

La economía paraguaya históricamente muy dependiente de sus dos vecinos, durante el año 2002, se vio fuertemente afectada por la crisis Argentina y la inestabilidad de la moneda brasileña, situación que produjo aún mayor inseguridad en la conducción de la política nacional.

A mediados del 2002, el sistema financiero sufrió una crisis con la caída del Banco Alemán S.A. (el segundo a nivel de ahorros dentro del sistema bancario nacional). Días antes había sido calificado por el Banco Central del Paraguay como una de las instituciones bancarias de más alto ranking, dejando a inversionistas y ahorristas esperando la devolución de sus aportes.

El gobierno intentó cumplir los ajustes fiscales y financieros exigidos por el FMI para recibir un préstamo de 200 millones de dólares. El acuerdo no se consiguió debido a la oposición de la Cámara de Diputados dominada por opositores al presidente González Macchi. La corrupción siguió creciendo y el presidente cerró el año con un alto rechazo de la ciudadanía.

En marzo, el gobierno inició un ambicioso programa de privatizaciones que tropezó con la oposición de la sociedad paraguaya. Se produjeron grandes movilizaciones y enfrentamientos con la policía. La ley de Reforma del Estado, inspiradora del programa, fue derogada por el Congreso.

Luego de tres semanas ininterrumpidas de movilizaciones y protestas sociales en todo Paraguay, el gobierno del Presidente Luis González Macchi intentó retomar equilibrio y orden público. Paso a paso el mandatario fue retrocediendo en sus propuestas, con el ánimo de mantenerse en el poder. En primera instancia retiró del Congreso el proyecto de Ley Antiterrorista reclamada por la embajada estadounidense; el proyecto de Ley de Fusión de las entidades públicas de crédito (privatización de la banca pública), elaborada entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo; el proyecto de IVA para los productos agrícolas, impulsado por el Ministerio de Hacienda; y la concesión de las rutas paraguayas a empresas privadas.

Ante esta decisión, el Congreso Democrático del Pueblo dispuso que se pusiera fin a los bloqueos de caminos y carreteras, pero con la advertencia de que estarían vigilantes y en permanente movilización para exigir el cumplimiento de los dos últimos puntos de su pliego de peticiones: la eliminación de la ley de privatizaciones generales 1615 y la no venta de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, COPACO.

Ante la continuidad del proceso de cambio en telecomunicaciones, los sectores campesinos decidieron trasladar su protesta hasta Asunción, para lo cual organizaron diferentes caravanas hacia la capital. Esto no fue bien recibido por el gobierno, quien dispuso la salida de los militares de sus cuarteles, en apoyo a la Policía Nacional. Los enfrentamientos fueron inevitables.

Nuevamente Macchi dio un paso atrás y ordenó la suspensión sin fecha límite de la venta de la telefónica nacional. Ello le sirvió únicamente para que sus propios colaboradores lo consideraran como un mandatario débil, fácil de ceder a las presiones, e incluso, incapaz de gobernar en situaciones críticas. El mismo presidente del Banco Central de Paraguay se lamentó por la decisión del mandatario pues señaló que la no venta de COPACO haría fracasar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual agravaría aún más la crisis económica iniciada en 1995.

En mayo, la oposición presentó una moción de censura contra el presidente (acusado en repetidas ocasiones de corrupción) que fue rechazada en agosto por la Cámara de Diputados. La propuesta impulsada por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico, del vicepresidente Julio Franco, fue respaldada por legisladores de la oficialidad colorada, y de los partidos País Solidario y Patria Querida.

En julio, se produjo una oleada de protestas en todo el país contra el Gobierno de Luis González Macchi. El 15 el presidente declaró el estado de excepción por cinco días y movilizó a las fuerzas armadas después de que una ola de manifestaciones en reclamo de su renuncia, dejara un saldo de dos muertos y por lo menos 50 heridos.

Las protestas, que el gobierno atribuyó a seguidores del ex general Lino Oviedo, se produjeron en veinte lugares del país, con bloqueos de puentes y rutas.

El estado de excepción de cinco días decretado por el Gobierno fue confirmado por el Congreso.

Centenares de campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, obreros, trabajadores públicos y delegados de organizaciones populares y sindicales, tomaron definitivamente la plaza ubicada frente al Congreso Nacional en Asunción, para exigir también la salida del presidente, a quien acusaban de corrupto e inepto en la conducción de las riendas estatales.

Por otro lado, la Central Nacional de Trabajadores del Paraguay, CNT, resolvió sumarse activamente a las protestas con la convocatoria a una huelga general por tiempo indeterminado, hasta que el gobierno y el Congreso pusieran fin a los intentos de privatizar lo que restaba de empresas en manos del Estado, el cese a la represión, la sanción a los culpables de la muerte de un campesino y la sanción a quienes intentaron feriar con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones, COPACO.

El gobierno de González Macchi estuvo plagado de denuncias de corrupción, pero la lealtad de legisladores de su Partido Colorado impidió varios intentos de destituirlo. Y en febrero enfrentó un juicio político por mal desempeño de funciones y presuntos hechos de corrupción, pero el Senado no logró la mayoría de votos para removerlo.

Una auditoría realizada en el Ministerio de Hacienda descubrió una red interna para el robo de las recaudaciones. En cinco años habían desaparecido al menos 30 millones de dólares. El propio Presidente fue acusado por la justicia del desvío de 16 millones de dólares de bancos intervenidos por el Estado y de utilizar un coche robado para uso oficial. La crisis financiera reveló que varias personas vinculadas al Gobierno, incluida la primera dama, tenían millonarios depósitos en dólares en las Islas Caimán.

O sea que la agenda política e institucional paraguayas transcurrieron el año analizado bajo el signo de la corrupción, la debilidad del gobierno y la convulsión social, por ello no extraña que ocupe el anteúltimo lugar en nuestro IDD-Lat 2004.

PERÚ



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	3,688	3,602	4,352
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,832	4,606	6,701
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	4,693	3,833	3,070
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-0,767	-0,651	-0,699
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,383	-0,568	-0,368

En lo económico, el país experimentó durante los primeros nueve meses del año, un crecimiento del PIB del 4,7% y un aumento de la inversión privada. Otros indicadores como el empleo, el consumo y la recaudación también eran favorables, lo que se traducía en un alto índice de aprobación al gobierno y una razonable popularidad del presidente Toledo. Sin embargo, las elecciones regionales de noviembre supusieron un duro golpe para Perú Posible, el partido en el gobierno. Esto, sumado al resurgimiento de Sendero Luminoso, arrojó un panorama complejo para el presidente, quien redujo notablemente sus índices de popularidad a finales de año.

El 17 de junio, el presidente Alejandro Toledo decretó estado de emergencia en Arequipa tras intensas protestas callejeras suscitadas por la privatización de las eléctricas Egasa y Egesur. El caso fue puesto en manos de la justicia y provocó una importante crisis política que obligó a Toledo a remodelar el gabinete.

La privatización de Egasa y Egesur habían provocado fuertes y persistentes movilizaciones sociales en las ciudades de Arequipa y Tacna que congregaban a diversos grupos que se oponían, recibiendo el apoyo del opositor partido APRA y de su máximo dirigente, Alan García. A las protestas iniciales se agregaron diversos alcaldes de municipios regionales, llegándose a conformar un Frente Amplio antiprivatizador.

El alcalde de Arequipa presentó un recurso ante los tribunales para anular las referidas privatizaciones, circunstancia que permitió al gobierno desdecirse y señalar que el proceso se postergaba hasta que no hubiese un pronunciamiento de los tribunales. También accedió a la formación de una Comisión de Alto Nivel para que estudiara los casos. Esto se tradujo en un incremento de las presiones y de los hechos de violencia que en definitiva empujaron al gobierno a suscribir un acuerdo con los manifestantes, denominado Declaración de Arequipa. En ésta se sostenía, en lo medular, que los "representantes del gobierno reconocían que el sentimiento y opinión de la comunidad arequipeña era visiblemente adversa al proceso de privatización". Tal afirmación equivalía claramente a una vuelta atrás.

Esta actitud de increíble sumisión a las presiones desbordadas no fue compartida por el Ministro del Interior, quien renunció al cargo y señaló que no se arrepentía de haber adoptado medidas represivas en la zona de protestas para cumplir con la obligación gubernamental de mantener el orden público.

A menos de tres semanas de la fecha en la que el presidente daría a conocer la recomposición de su Gabinete ministerial, el 28 de julio, su equipo de ministros, liderado por el abogado Roberto Dañino, presentó su renuncia.

La renuncia de todo el Gabinete ministerial, considerada por los analistas como una de las crisis más fuertes del Gobierno, ocurrió en momentos en que la gestión del presidente ya recibía la desaprobación del 70 por ciento de los peruanos. Esta crisis se inició con la dimisión del ministro de Relaciones Exteriores, quien presentó su renuncia irrevocable al cargo. Seguidamente, el Ministro de Trabajo confirmó la decisión del Gabinete ministerial de renunciar anticipando la esperada decisión de reemplazo del Gabinete.

En el fondo de las movilizaciones subyacía una de las variadas inconsistencias del Presidente Toledo. Como candidato él había asegurado que no efectuaría tales privatizaciones, de tal manera que al hacerlo no sólo se contradecía, sino que además provocaba un sentimiento de frustración en quienes habían sido sus seguidores desde la primera hora. Ante ello Toledo volvió sobre sus pasos, generándose la percepción de un gobernante que no era capaz de mantener sus decisiones en tiempos de crisis.

Las señales que se derivaron de estos acontecimientos fueron de singular gravedad. En primer lugar, el gobierno quedó en una posición de notoria debilidad. Sus opiniones y decisiones se mantuvieron mientras no se opusieran a ellas movilizaciones prolongadas que incluyeran expresiones de violencia. En tal caso, el gobierno, en vez de restablecer el orden y garantizar la seguridad, nombraba comisiones y dialogaba con los manifestantes para dar legitimidad social a la revisión y derogación de sus decisiones anteriores. El gobierno y, en particular, el presidente Toledo perdieron su credibilidad.

En segundo lugar, en materia de privatizaciones se generó un clima de inestabilidad e incredulidad entre los inversionistas extranjeros.

En tercer lugar, se dio una primera señal de que más allá de una postergación del proceso de privatizaciones, a lo que se apuntaba era al cambio en el modelo económico implementado a comienzos de los años noventa.

En cuarto lugar, quedaba de manifiesto que no había liderazgo presidencial en Perú. Tras el manejo de esta situación, Toledo quedó caracterizado como un gobernante que no guardaba relación entre lo que sentía y lo que hacía, por lo que sus decisiones fueron extremadamente vulnerables a los cambios en su temperamento y francamente permeables a las presiones externas cuando provenían de masas movilizadas.

En quinto lugar, tanto el desencadenamiento del conflicto como las consecuencias políticas que se fueron agregando, dejaron en evidencia que Perú era cada vez más un escenario propicio a los estallidos sociales.

En definitiva, lo que pasaba en Perú marcaba el inicio de una etapa de redefiniciones a nivel de gobierno. Quedaba claro que por sobre las garantías que daba el Ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, sobre la manutención y proyección del modelo económico, había terminado por prevalecer el perfil contradictorio del Presidente que ya se había insinuado en la campaña electoral. También quedaba claro que en ese escenario las instituciones no eran las que tenían la última palabra, sino que ésta se encontraba en las movilizaciones sociales que no debían hacer gran esfuerzo para descolocar a las autoridades.

El 22 de julio, todos los partidos políticos y fuerzas sociales firmaron un Acuerdo Nacional de Gobernabilidad, documento que establecía 20 políticas de Estado con carácter vinculante para Gobiernos elegidos en los próximos veinte años.

El 18 de noviembre se realizaron elecciones regionales y municipales. La primera consecuencia de la elección fue la contundente derrota del gobierno. El electorado expresó un categórico rechazo a la política vacilante del Presidente. El ganador más importante de la jornada fue el APRA, partido liderado por el ex Presidente Alan García Pérez.

La distribución de los gobiernos regionales fue la siguiente: APRA 10; diversos movimientos independientes 8; Unión por el Perú (coalición de izquierda) 3; Acción Popular 1; Somos Perú 1; Nueva Izquierda 1; y el gobernante partido Perú Posible 1. Dos años atrás, el partido oficialista tenía mayoría en 22 de las 25 provincias del país.

El hecho de que la segunda fuerza en número de presidencias regionales fueran diversos movimientos independientes de carácter regional y no necesariamente vinculados entre sí, significaba que fuera del fortalecimiento del APRA, persistió en el país una fuerte atomización política que, a su vez, era reflejo de una crisis de representación de los partidos.

El independentismo sobrepasó los límites de lo absurdo en esta elección. No sólo por la enorme cantidad de listas, tanto a nivel regional como municipal, sino por las curiosas denominaciones de las mismas que en nada permitían perfilar los proyectos en que se sustentaban sus candidaturas: movimientos como "La Manzana", "Solución Popular" o "Chim Pum Callao", invitaban más a la sonrisa que a la reflexión.

La centroderecha peruana no logró mayor representatividad, aun cuando ganó la alcaldía de Lima, con Luis Castañeda, un político que había hecho un variado recorrido por diversas agrupaciones políticas y que fuera candidato presidencial el año 2000 por "Solidaridad Nacional", en competencia con la entonces postulante oficial del sector Lourdes Flores.

Para complejizar aún más el escenario, hay que agregar que el fujimorismo estuvo presente de manera indirecta a través de personeros que formaron parte de sus filas y que aparecieron reubicados hasta en los lugares más insólitos, como fue el caso de Miguel Mufarech, elegido presidente del gobierno regional de Lima y que en 1998 fue destacado militante del movimiento fujimorista "Vamos Vecino".

Más allá de los datos electorales hay un factor potenciador de crisis que no puede dejarse de lado y que revela la improvisación con que se realizaron las elecciones. La Ley de

Gobiernos Regionales fue promulgada sólo el día antes del acto electoral. En otras palabras toda la campaña se desarrolló sobre la base de presumir una existencia de cargos a los que se postulaba sin que realmente estuviesen consagrados jurídicamente.

¿Con qué respaldo político podrá imponer sus criterios el débil gobierno de Toledo ante gobiernos regionales dirigidos por sus opositores? En la delicada materia de asignación de recursos, la pugna puede ser dramática y resultar altamente perjudicial para el país, pues si el gobierno central no logra establecer disciplina presupuestaria, aumentará el déficit fiscal.

REPÚBLICA DOMINICANA



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	4,631
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	4,625
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	4,657
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-1,227
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		1,207

PRESIDENTE: HIPÓLITO MEJÍA

En 2002, el gobierno tuvo que enfrentar a una importante crisis económica y política generador por reiterados cortes en el suministro eléctrico. Las tensiones entre usuarios, compañías distribuidoras y el gobierno fueron incrementándose progresivamente hasta llegar a violentos enfrentamientos en las calles e investigaciones en el Senado.

La muerte de Joaquín Balaguer conmocionó en julio al país. Finalizaba con él una etapa trascendental de la política dominicana.

Antes, el 16 de mayo se realizaron las elecciones legislativas y municipales. Los dominicanos acudieron a las urnas para elegir entre 11 mil candidatos a 32 senadores, 150 diputados, 125 alcaldes, 787 regidores (ediles) y otros tantos suplentes, cargos por los que compitieron 23 agrupaciones políticas.

Los electores inscritos en el padrón electoral llegaron a los 4,6 millones, distribuidos en 11.649 colegios electorales ubicados en todo el país. De acuerdo con los resultados emitidos por la JCE, el porcentaje de abstención fue del 48,98 por ciento.

La legislación electoral dominicana estrenó tres novedades en su sistema electoral: El voto preferencial, las circunscripciones electorales y la participación del 33 por ciento de la mujer en las listas partidarias.

La izquierda participó unida en una Coalición integrada por doce (12) organizaciones y tres boletas, pero no alcanzó representación, mientras que cerca del 55% de los votantes se abstuvo de ejercer sus derechos.

Los fraudes electorales formaban parte de un pasado oscuro en la República Dominicana, por eso estaban inscritos 6 mil vigilantes ciudadanos y cientos de observadores extranjeros que buscaban evitar el retorno del fantasma del fraude electoral en los comicios presidenciales. La violencia política de ese año cobró seis vidas y decenas de heridos. Desde 1986 las campañas políticas han costado la vida a 90 personas y dejado más de 200 heridos.

El aumento de la popularidad de Leonel Fernández hizo que el gobierno de Mejía, desesperado, utilizase en forma abierta y descarada los recursos del Estado a su favor. El mandatario destinó 18.000 motocicletas para moto-taxis, que circulaban en patrullas embanderadas. Los empleados públicos debían participar de los actos de campaña del presidente y los transportes estatales servían para acarrear a militantes del PRD. Mejía regalaba planchas eléctricas y material de construcción a cambio de votos.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), partido del presidente Hipólito Mejía, se consolidó como la principal fuerza política con el 42,24% de los votos.

URUGUAY



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
Índice de Desarrollo Democrático	4,659	7,517	9,766	9,736
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	6,734	7,904	8,112
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	6,276	7,950	7,950
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		1,482	1,900	2,195
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		0,542	1,777	1,215

PRESIDENTE: JORGE BATLLE

Desde el inicio de su mandato, el gobierno se articuló en una coalición, formada junto al Partido Blanco, lo cual le permitió contar con mayoría parlamentaria, que en octubre del año 2001 entregó al presidente un paquete de 57 medidas de reactivación económica, las mismas fueron ignoradas en su gran mayoría por el Ejecutivo.

El Presidente Jorge Batlle, del tradicional Partido Colorado, había asumido en marzo de 1999 con crédito y popularidad, apoyo que decayó fuertemente en el 2002 debido a la debacle económica nacional y regional de los años siguientes a la asunción de su mandato.

El país en el 2002 vivió una de las mayores crisis financieras de su historia cuando los ahorristas argentinos arrastrados por la crisis de su país, retiraron de los bancos uruguayos depósitos por valor de 4.022 millones de dólares. El Gobierno se vio obligado a decretar el cierre de los bancos por una duración mínima de 24 horas en un intento de detener la fuga de depósitos.

El gobierno se encontraba negociando desde hacía meses un paquete de rescate financiero con los organismos multilaterales. La última etapa de las conversaciones se inició el 23 de julio de 2002, justo el día en el que Batlle tuvo que remover al hasta entonces ministro de Economía, Alberto Bensión, luego de que éste perdiera la confianza del Partido Nacional (o Blanco), e instala en el cargo a Alejandro Atchugarry. El propio Atchugarry confirmó que los negociadores lograron convencer en Washington al FMI de enviar ayuda para hacer frente a la situación. Crucial para ello resultó el apoyo de Estados Unidos, cuyo Departamento del Tesoro lanzó un comunicado diciendo que "Uruguay ha sido un fuerte actor en América Latina y merece un continuo apoyo de la comunidad financiera internacional".

El perfil de Atchugarry parecía el apropiado. El ministro era el hombre de confianza de Batlle en el Congreso y tenía un sesgo marcadamente político.

La oposición izquierdista, reunida en la alianza Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA), era poderosa y poseía influencia en los sindicatos. Pese a que era esperable que el EP-FA resistiera los cambios que debían producirse para satisfacer al FMI, lo más probable era que reinara la mesura. El ejemplo de Argentina, con su crisis económica, social y política, era muy cercano como para que lo ignorasen. Nadie esperaba que Uruguay cayera a los niveles de su vecino.

El partido Blanco retiró a sus Ministros del Ejecutivo y dejó la coalición de gobierno por las diferencias surgidas en el abordaje de la situación de crisis económica y financiera que venían manifestándose desde octubre de 2001. Con la renuncia de cuatro de sus cinco ministros, el líder blanco y ex presidente Luis Lacalle justificó la decisión porque, opinó que el gobierno se agotaba y se vaciaba de contenido. Sin embargo, la sociedad entre ambos partidos tradicionales de Uruguay continuaría en el Congreso. Pese a que la mayoría de los ministros afectados no deseaba esta ruptura, y dos de ellos pertenecían a sectores que no votaron por abandonar la coalición, pero todos cumplieron con la resolución del Directorio y la Convención.

La ruptura fue atenuada por las “seguridades” proporcionadas por los blancos de que sus legisladores apoyarían al gobierno en el parlamento, sin lo cual la aprobación de normas legales favorables al gobierno sería imposible. Con ello, además, los nacionalistas blancos retuvieron sus cargos en las empresas y servicios autónomos del estado que tienen directorios colegiados.

La caída del gabinete no supuso un cambio en los apoyos internos del partido Colorado. El principal socio de la lista 15 de Batlle, el Foro Batllista liderado por el ex presidente Julio María Sanguinetti, se mantuvo en la prudencia. No pidió cubrir las vacantes con hombres de su sector.

El presidente Batlle manifestó su interés en modificar la ley de ministerios para reducirlos, de modo que sólo una de las cuatro carteras renunciantes fuese cubierta. Dado que el Ministerio de Deportes se creó exclusivamente por pedido del Dr. Luis Alberto Lacalle, para tener un hombre más en el gabinete, este era fácil de suprimir; sus competencias serían subsumidas por el Ministerio de Educación y Cultura de donde provenían las direcciones e instituciones manejadas por ese ministerio. El Ministerio de Turismo creado hacía dos administraciones retornaría como Dirección al Ministerio de Industrias.

El presidente pretendía que el Ministerio de Vivienda, Administración Territorial y Medio Ambiente, retornase como direcciones al ámbito del Ministerio de Transporte, comunicaciones y Obras Públicas, pero se le hizo notar que eran demasiadas competencias para ser manejada desde un sólo ministerio. A su vez la posibilidad de suprimir el Ministerio de Trabajo, fue vista como irritativa en tiempos de agitación social. Por lo tanto se abandonó la idea de suprimir estas dos carteras.

Mientras se lograba el cambio legal, los Ministerios de Turismo y Deportes pasaron a ser cubiertos por otros titulares. Ahora Batlle contaba con un gabinete que estaba integrado por mitades por representantes políticos y técnicos sin respaldo partidario.

El gobierno asumió, en esta nueva circunstancia, casi un carácter “provisional”, hasta la próxima elección, o la próxima crisis que obligara a hacer un ajuste de rumbo fuerte.

Por ahora era un gobierno más administrador que innovador o reformador y en buena medida de perfil tecnocrático, especialmente en los ministerios que manejaban aspectos económicos y sociales, pero había una fortísima excepción. El ministerio más relevante, el de Economía y Finanzas, normalmente en manos de un técnico y no de un político que fuera elegido en un comicio, estaba precisamente en manos de una persona de estas características, el Dr. Alejandro Atchugarry, que pasó a ser el referente sustancial de gobierno.

La ruptura precipitada por los nacionalistas tenía un contenido electoralista. Considerando que el partido Colorado debía pagar la “factura” por el descontento popular frente al gobierno la jugada buscaba tener una imagen “diferente”, de modo que el partido apareciera corrido hacia la “izquierda”, dejando en solitario en el espectro a la “derecha” a los colorados.

La estrategia del líder blanco Lacalle era un “buen negocio” apuntando a una elección en la que buscaría que su partido fuera la segunda fuerza en detrimento de los colorados.

Entre los colorados, Batlle que tenía un débil aparato propio, la “lista 15”, se encontraba en situación de total agotamiento. Ni siquiera tenía en su elenco político seguidores fuertes para poder cubrir las subsecretarías vacantes. El partido Colorado era el Foro Batllista y Sanguinetti.

VENEZUELA



	Promedio Regional Año 2004	Año 2004	Año 2003	Año 2002
<i>Índice de Desarrollo Democrático</i>	4,659	1,552	2,811	2,243
Respeto de los Derechos Políticos y Libertades Civiles	4,592	3,033	4,088	3,129
Calidad Institucional y Eficiencia Política	4,728	1,032	2,083	2,183
Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar		-0,498	-0,701	-0,640
Capacidad para generar Políticas que aseguren eficiencia económica		-0,462	0,153	-0,186

PRESIDENTE: HUGO CHÁVEZ

2002 fue un año políticamente convulsionado por la permanente confrontación entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición. En abril, el presidente Chávez fue derrocado durante 48 horas y dio paso a un fugaz gobierno de transición presidido por Pedro Carmona, que terminó huyendo del país y con la reposición de Chávez en el poder.

El 10 de abril, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), declaró la huelga general indefinida, al día siguiente se produjeron violentos enfrentamientos.

El 12 de abril se produjo el golpe de Estado, generando una situación de gran confusión en el poder, el presidente Chávez parecía haber renunciado y Pedro Carmona (presidente de la organización empresarial Fedecámaras) anunciaba que encabezaba el nuevo gobierno de transición de forma provisional. Pero tras dos días de incertidumbre, el 14 de abril, el presidente Chávez fue repuesto en el poder.

Tras ese tremendo episodio, de enorme gravedad institucional y política, la oposición incrementó sus manifestaciones de protesta al gobierno. Se convocaron dos huelgas generales, (la última de las cuales se mantuvo hasta febrero de 2003) a las que se sumó Petróleos de Venezuela (PDVSA) pilar fundamental de la economía venezolana.

Los esfuerzos de presionar por la salida de Chávez tuvieron dos momentos: abril de 2002 y el llamado paro cívico de diciembre de 2002 a febrero de 2003.

En ninguno la oposición se pudo cumplir el objetivo que se había propuesto – la salida de Chávez del poder– bien por presión militar, bien por renuncia o bien por un compromiso viable del presidente de proceder a una consulta popular de veredicto vinculante con fecha cierta y próxima. De hecho, los actos de abril determinaron la salida de Chávez del poder por 48 horas, por la vía de un pronunciamiento militar no violento.

El impulso de diciembre- febrero no determinó la salida de Chávez, pero aceleró la crisis económica y social que se venía desarrollando a un ritmo más pausado, intensificó la politización general de la sociedad y dio ocasión al despido masivo de los hombres de la industria petrolera, que había sido pivote central del paro cívico.

A finales de año, el país se encontraba paralizado, socialmente enfrentado y en una situación económica crítica. El gobierno solicitó la mediación del secretario general de la OEA, César Gaviria, para buscar una salida negociada a la crisis.

Ese año, Venezuela fue escenario de una contundente movilización ciudadana que reclamaba en las calles la renuncia del Presidente Chávez o una modificación constitucional que posibilitara la realización anticipada de elecciones presidenciales. Se trataba del llamado "Paro Cívico", que era una clara expresión de la protesta que surgía en la sociedad civil en contra de un gobierno caracterizado por su doble sello populista y autoritario. No se puede hablar, en este caso, de una acción política de la oposición institucional pues los partidos aún no se recuperan de la profunda crisis que los afectó en los años noventa, siendo reducidos a mínimas expresiones de representatividad. A diferencia de otras experiencias, eran las personas directamente o a través de sus asociaciones gremiales y sindicales las que estaban mostrando su voluntad de desobediencia civil frente a un gobierno que estimaban había perdido legitimidad.

La movilización en contra del coronel Hugo Chávez respondía a cuestionamientos de fondo de su gestión. En primer lugar, se le acusaba de apartarse en los hechos del comportamiento democrático. No aceptaba la existencia de juicios críticos a su gestión y no vacilaba en incentivar el empleo de la violencia en contra de quienes lo hacían. El permanente hostigamiento que sufrían los medios de prensa adversos, en especial los canales de televisión ilustraron esta afirmación.

En segundo lugar, se le acusaba de violar sistemática y reiteradamente el Estado de Derecho.

En tercer lugar, se le acusaba de polarizar al país y promover acciones terroristas. Respecto de lo primero bastaba escuchar sus discursos de enorme agresividad para con sus opositores y completamente alejados del propósito de buscar y consolidar la armonía social. Chávez hizo de la polarización social un instrumento para cimentar su "proyecto revolucionario". Proyecto que tuvo un impulso fundacional con respaldo ciudadano mientras el objetivo era promover el cambio constitucional, pero que una vez logrado quedó reducido a los propósitos personalísimos del caudillo. Respecto de la promoción del terrorismo, debe señalarse la creación por el chavismo de los llamados "Círculos Bolivarianos", agrupaciones civiles armadas que protagonizaron de manera cada vez más reiterada acciones paramilitares de intimidación a los opositores y en contra de los medios de prensa. El Presidente Chávez no sólo los favoreció con la permisividad gubernativa sino que públicamente los instó a actuar, como cuando los llamó a "defender la revolución con armas".

En cuarto lugar, se le acusaba de no escuchar las inquietudes ciudadanas. Su rechazo a la realización de cualquier consulta acerca de su gobierno era la expresión de un autismo político.

Si en el plano político estaban dados todos los elementos de una crisis general, en la economía también se evidenciaban claramente sus efectos. El Paro Cívico, en un año de inestabilidad permanente, había implicado un incremento del riesgo país en términos de dificultar seriamente el financiamiento externo para cualquier proyecto de inversión que se deseara llevar a cabo en Venezuela. El paro portuario había reducido las importaciones y exportaciones - entre ellas del petróleo - generando un impacto negativo sobre los ingresos fiscales y sobre el déficit presupuestario. El gobierno había decidido emitir dinero sin respaldo para solventar el gasto corriente recurriendo al financiamiento inflacionario.

Los indicadores de mayor impacto social de esta crisis fueron el cierre de empresas, el incremento de la desocupación y la fuerte baja de la actividad comercial.